



INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2025

AUTORES

Andrew Firmin
Inés M. Pousadela
Mandeep Tiwana

INVESTIGADORES

Martina Guarnaschelli
Samuel King
Nirvaly Mooloo
Victoria Ubierna

COMUNICACIONES

Camille De Ocampo
Kgalalelo Gaebee
Thapelo Masiwa
Lerato Pagiwa
Silvia Puerto Aboy
Joseph Sila

DISEÑO

Juliana Pecollo

FOTO DE PORTADA: Manifestación en Washington D. C., Estados Unidos, contra los recortes de empleos federales y la influencia de Elon Musk en el gobierno. Foto de Bryan Dozier/Middle East Images/AFP vía Getty Images.

FECHA DE PUBLICACIÓN: MARZO DE 2025



ACERCA DE ESTE INFORME

CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil, les presenta su Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2025. Esta edición del informe, la decimocuarta, repasa los acontecimientos de 2024 y principios de 2025 e identifica tendencias en la acción de la sociedad civil en todos los niveles y esferas, desde la respuesta a conflictos hasta la demanda de reforma de las instituciones de gobernanza mundial, pasando por las luchas por la democracia, la inclusión y la justicia climática.

El informe de este año tiene un nuevo formato más breve y accesible. Se alimenta de las investigaciones producidas por nuestra plataforma de análisis **CIVICUS Lens**, y recoge las voces de actores de la sociedad civil afectados por los eventos en curso y activos en la respuesta. Incorpora más de 300 entrevistas y 80 artículos publicados por CIVICUS acerca de más de 120 países y territorios, identificables mediante los íconos  para los artículos y  para las entrevistas.

Este informe ofrece una perspectiva de la sociedad civil sobre el estado del mundo a principios de 2025: un panorama marcado por múltiples crisis, entre ellas de los derechos humanos y los valores democráticos, donde una sociedad civil asediada enfrenta crecientes limitaciones de recursos. Sin embargo, a pesar del progresivo estrechamiento del espacio cívico, la sociedad civil continúa su labor incansable y no cede terreno. En tiempos convulsos, continúa incluso logrando importantes victorias mediante la incidencia, la movilización, el litigio estratégico y la solidaridad internacional.

En un escenario global en plena reconfiguración, marcado por el ascenso del populismo de derecha, la autocratización, la violencia atroz, la parálisis frente al cambio climático y la desigualdad económica, este informe documenta tanto los desafíos como las inspiradoras respuestas movilizadas por activistas y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Gracias a su perseverancia y determinación ante la adversidad, mantienen encendida la esperanza de un mundo más pacífico, equitativo y sostenible. Este informe está dedicado a todas las personas que continúan luchando para mantener viva este ideal.



ÍNDICE

PANORAMA	4
CONFLICTO	
LA LEY DEL MÁS FUERTE	10
DEMOCRACIA	
REGRESIÓN Y RESILIENCIA	19
ECONOMÍA	
LA ERA DE LA PRECARIEDAD Y LA DESIGUALDAD	28
CLIMA Y MEDIO AMBIENTE	
EL RUMBO EQUIVOCADO	33
TECNOLOGÍA	
LOS PELIGROS HUMANOS DEL PODER DIGITAL	40
LUCHAS DE GÉNERO	
REACCIÓN, RESISTENCIA Y PERSEVERANCIA	48
DERECHOS MIGRANTES	
HUMANIDAD VERSUS HOSTILIDAD	55
NACIONES UNIDAS	
LA GOBERNANZA MUNDIAL EN CRISIS	62
SOCIEDAD CIVIL: LA LUCHA CONTINUÍA	69
AGRADECIMIENTOS	70



PANORAMA

Un mundo en crisis

El mundo está experimentando crisis múltiples que se están acelerando. La población civil está siendo masacrada en conflictos en Gaza, Sudán, Ucrania y muchos otros países, y los responsables de estas atrocidades confían en que saldrán impunes. Parece estar en marcha un realineamiento global impulsado por el gobierno de Donald Trump, quien parece decidido a recompensar los actos de agresión, rompiendo alianzas internacionales de décadas de antigüedad y abandonando principios compartidos en favor de un nuevo eje autoritario. Estos cambios podrían desencadenar nuevas guerras, puesto que los agresores sabrán que pueden recurrir a la fuerza para tomar ventaja sin sufrir consecuencias, lo que podría conducir a la humanidad a un conflicto mundial catastrófico.

Todos los progresos conseguidos en la construcción de un orden internacional basado en el respeto de los derechos humanos corren el riesgo de ser desechados en favor de la ley del más fuerte. En un contexto de crisis de la gobernanza global, escasean los liderazgos con principios. En vez de la cooperación para resolver los problemas acuciantes que trascienden las fronteras, vemos que se imponen

cada vez más los estrechos intereses nacionales y los enfoques transaccionales de las relaciones internacionales. Asimismo, el gasto militar está aumentando en detrimento de la asistencia destinada a las personas más pobres y vulnerables del mundo.

Agravadas por los conflictos, la crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad se están acelerando. 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, y sin embargo las empresas de combustibles fósiles continúan obteniendo beneficios récord, planificando nuevos proyectos extractivos, reduciendo sus proyectos de energía renovable y usando su poder económico para presionar para que nada cambie.

El aumento de los beneficios procedentes del petróleo y el gas es solo un síntoma de la profunda disfuncionalidad de la economía global, en la que las personas más ricas del mundo siguen enriqueciéndose mientras muchas personas experimentan dificultades en lo que parece ser una crisis inflacionaria permanente. Los superricos ya no se conforman con influir en la legislación impositiva y otras medidas que les afectan directamente, sino que, cada vez más, buscan controlar directamente la política, suscitando legítimos temores de una captura oligárquica del Estado. El capitalismo de amigos está alcanzando

nuevas cotas, beneficiando a multimillonarios del sector tecnológico y a magnates de los medios de comunicación que utilizan su poder para moldear y distorsionar el debate político difundiendo mentiras y discurso de odio. La crisis de desinformación se ve acelerada por los rápidos avances de la inteligencia artificial generativa.

Al amparo de la desinformación crecen el populismo de derecha, el nacionalismo y los gobiernos autocráticos y militares, provocando una crisis de la democracia que barre con los frenos y contrapesos, el derecho a expresar disenso y la capacidad de controlar al poder. Esta crisis de la democracia es también una crisis del espacio cívico, ya que las libertades cívicas fundamentales se ven atacadas allí donde se erosionan las libertades democráticas. Las fuerzas antidemocráticas están promoviendo agendas que culpabilizan y difaman a grupos excluidos y atacan contra sus derechos. Están llevando a cabo intentos de reducir los derechos de las mujeres, las personas LGBTQI+ y las personas migrantes y refugiadas.

Justo cuando más se la necesita, la sociedad civil está sufriendo una grave crisis de financiación. En los últimos años, importantes fuentes de recursos financieros como las agencias bilaterales de cooperación han reducido sus contribuciones, alineándose cada vez más con estrechos intereses nacionales, particularmente de defensa, diplomáticos y comerciales. En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil tienen mayores dificultades para obtener apoyo para sus actividades básicas y aumenta el riesgo de que sean instrumentalizadas para fines que les son ajenos. Además, muchos Estados han aprobado leyes para dificultar el acceso de las organizaciones al financiamiento internacional y denigran a las que lo reciben.

Varios estados europeos han reducido su apoyo a la sociedad civil y otros países no han logrado llenar ese vacío, alejando toda perspectiva de cumplimiento de los metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más recientemente, la congelación imprudente y malintencionada de los fondos de USAID ha llevado la crisis a un punto crítico. Muchos grupos de la sociedad civil enfrentan una amenaza existencial.



Miembros de la organización alemana SOS Humanity ayudan a personas a bordo de un bote abarrotado durante una misión de rescate de migrantes en el Mediterráneo.

Foto de Pietro Bertora/SOS Humanity.

El papel vital de la sociedad civil

El mundo necesita a la sociedad civil. Basta con imaginar cómo sería la vida sin ella. Las violaciones de derechos humanos y la impunidad se generalizarían. La democracia se vería aún más erosionada y la ciudadanía perdería su capacidad de influir en las decisiones que afectan sus vidas, ya que líderes políticos autocráticos y oligarcas quedarían libres de hacer lo que quisieran, poniendo al Estado al servicio de sus intereses. El cambio climático se aceleraría, superando todos los puntos de no retorno, y el colapso ambiental alcanzaría niveles catastróficos. Las mujeres perderían el control sobre sus propios cuerpos, las personas LGBTQI+ tendrían que vivir escondidas y con miedo, y las minorías excluidas enfrentarían violencias cotidianas. Estos peligros son cada día más acuciantes.



Foto de Rodrigo Buenalía/AFP vía Getty Images

Indígenas Waorani protestan contra la extracción de petróleo en el Parque Nacional Yasuní frente a la Corte Constitucional de Ecuador, 30 de agosto de 2024.

Incluso bajo enorme presión, la sociedad civil sigue demostrando su valor. En las zonas de conflicto, los grupos de base están cubriendo importantes carencias de la respuesta humanitaria, documentando violaciones de derechos humanos y abogando por la protección de la población civil. Aliados internacionales están emprendiendo acciones legales y colaborando con instituciones internacionales para poner fin a las masacres, bloquear el suministro de armas a los autores de violaciones de derechos humanos y obligar a los perpetradores de atrocidades a rendir cuentas.

En numerosos países, la sociedad civil ha logrado movilizarse para impedir regresiones autoritarias, garantizar elecciones justas y desafiar intentos de concentrar el poder. Las luchas por la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTQI+ continúan avanzando gracias a persistentes campañas y esfuerzos de incidencia, obteniendo victorias legislativas y judiciales pese a la intensificación de la reacción.

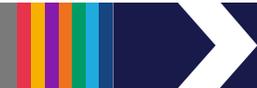
Mediante el litigio estratégico, la sociedad civil ha sentado precedentes legales innovadores que obligan a los gobiernos a adoptar medidas más ambiciosas contra el cambio climático y a respetar los derechos ambientales. Pese a los enormes peligros, el activismo ambiental continúa su labor vital para que Estados y empresas respondan por sus actos.

En diversos contextos, la sociedad civil está empleando una amplia variedad de tácticas que van desde la movilización masiva y las campañas digitales hasta las demandas legales y la incidencia internacional, demostrando que es capaz de oponer resistencia. En estos tiempos difíciles y convulsos, seguirá haciéndolo pese a las restricciones del espacio cívico y el recorte deliberado de la financiación. La sociedad civil es una fuente vital de resistencia, resiliencia y esperanza. Si bien la situación es difícil, en ausencia de la sociedad civil sería todavía peor.

La solución: reimaginar la sociedad civil

En tiempos difíciles, puede resultar difícil ser creativos y la introspección puede parecer autocomplaciente. Sin embargo, las crisis también pueden ser una ocasión para experimentar. Ha llegado el momento de que la sociedad civil se plantee qué puede hacer para garantizar que seguirá siendo capaz de defender y promover los derechos humanos en medio de estas múltiples crisis.

Adoptar una **mentalidad de movimiento** es esencial para el futuro de la sociedad civil. En lugar de funcionar como organizaciones burocráticas rígidas, diseñadas para adaptarse a las exigencias de los donantes, los grupos de la sociedad civil deben abrazar la flexibilidad. Esto significa desarrollar formas organizativas que se ajusten a los cambios que la sociedad civil reclama y que sean adecuadas para las comunidades con las que trabaja.



Las iniciativas más exitosas de la sociedad civil de los últimos años han incorporado elementos propios de los movimientos: liderazgo distribuido, toma de decisiones ágil, foco en los valores compartidos, voluntad de escucha y capacidad de movilizar rápidamente a bases amplias. El movimiento contra el cambio climático ha demostrado la capacidad de acción de estructuras descentralizadas lideradas por jóvenes. Los movimientos feministas nos han enseñado cómo construir poder mediante formas organizativas horizontales que conectan a las personas atravesando barreras geográficas, raciales y de clase, colocando en el centro a quienes suelen quedar excluidos. Han demostrado lo que es priorizar la acción colectiva en aras del cambio social por sobre la autopreservación institucional.

La sociedad civil debe dar prioridad a los **vínculos comunitarios auténticos**, en particular con los grupos excluidos del poder. Esto implica ir más allá de las tradicionales consultas con partes interesadas y establecer relaciones auténticas con las comunidades, incluidas las que se encuentran lejos de los centros urbanos, desfavorecidas por la brecha digital o por algún motivo alejadas de las estructuras y procesos de toma de decisiones. Cada vez más, trabajar de forma eficaz significa facilitar la autoorganización de las comunidades y rendir cuentas a los destinatarios de la acción de la sociedad civil, más que hablar en su nombre.

Esto requiere cambios sustanciales en las formas en que opera de la sociedad civil. Si bien muchas organizaciones ya están siguiendo este camino, la sociedad civil en su conjunto aún tiene un largo trecho por recorrer. Debe invertir en una escucha atenta, compartir poder con sus socios comunitarios y aprender a medir el éxito por la solidez de las relaciones forjadas, y no solo por las métricas de resultados.

Apoyándose en la escucha, la sociedad civil debe desarrollar **contrarrelatos efectivos** que no se limiten a señalar los problemas, sino que ofrezcan visiones alternativas convincentes para contrarrestar las seductoras pero peligrosas narrativas del populismo, el nacionalismo y el autoritarismo. Estos contrarrelatos deben



Manifestación contra la declaración de ley marcial del presidente Yoon Suk Yeol frente a la Asamblea Nacional en Seúl, Corea del Sur, 4 de diciembre de 2024.

abordar las preocupaciones legítimas de la gente en relación con la precariedad económica y la inseguridad, así como su sensación de impotencia. Al mismo tiempo, deben inspirar optimismo, ofrecer soluciones inclusivas basadas en derechos y alejar la tentación de usar de chivos expiatorios a los grupos excluidos.

Los contrarrelatos deben establecer un vínculo entre los valores universales y los contextos y preocupaciones locales. Por ejemplo, puede que sea más eficaz plantear la acción climática en términos de resiliencia comunitaria, oportunidades para obtener ingresos y justicia para las generaciones futuras, que hablar de cumbre, metas y objetivos globales. En lugar de defender los principios democráticos de forma abstracta, puede ser más útil presentar a la democracia como un sistema capaz de adaptarse a las preferencias de las personas y de ofrecerles beneficios tangibles que mejoren sus vidas.



Manifestación frente al edificio de USAID en Washington D. C., Estados Unidos, tras las órdenes de cierre, 3 de febrero de 2025.

También hacen falta **sistemas de alerta temprana** para responder al retroceso de la democracia y la degradación del espacio cívico. La sociedad civil puede desarrollarlos mediante la definición de indicadores clave que permitan monitorear la reducción del espacio cívico, desde cambios regulatorios que son presentados como inofensivos hasta ataques directos contra activistas y organizaciones. Estos sistemas deben estar vinculados a mecanismos de respuesta rápida que faciliten una presión coordinada a nivel nacional e internacional ante las señales de alerta. El CIVICUS Monitor ya realiza un monitoreo del espacio cívico en todo el mundo, pero la respuesta preventiva podría mejorarse con la creación de sistemas de alerta temprana locales que incluyan detonantes específicos para la acción.

Todas las respuestas deben basarse en el principio movilizador de la **resistencia solidaria**. Esto significa apoyarse mutuamente frente a las amenazas y reconocer el valor inherente de la movilización y la participación más allá de las victorias políticas inmediatas. Incluso cuando la victoria parece remota, la movilización desempeña un papel fundamental para fomentar la unión, construir identidades colectivas, fortalecer la resiliencia del movimiento, mantener la esperanza y preservar espacios donde puedan florecer prácticas alternativas. El optimismo debe seguir siendo el faro de la sociedad civil.

Para poder dar respuesta a estos desafíos, la sociedad civil debe establecer **redes a todos los niveles**, desde el local al global, implicando a tantos miembros y aliados de la sociedad civil como sea posible, y mejorar el funcionamiento de las redes existentes. La resiliencia de la sociedad civil radica en la capacidad de fomentar la solidaridad entre colectivos diversos que trabajan en distintos temas y geografías. Estas conexiones favorecen la movilización rápida de apoyos en caso de crisis, el intercambio de estrategias exitosas y la puesta en común de recursos y competencias. Las nuevas tecnologías pueden facilitar estas conexiones, pero las redes no pueden depender únicamente de ellas; deben construirse sobre la base de una confianza y reciprocidad auténticas, y organizarse de forma horizontal y democrática, no de arriba abajo ni lideradas desde el norte global.

Junto con las redes, los **liderazgos guiados por valores** son ahora más importantes que nunca. Los y las líderes de la sociedad civil deben resistir la tentación de autocensurarse o restar importancia a los valores para tranquilizar a donantes, gobiernos u otros actores poderosos. Ello requiere fomentar culturas de apoyo entre organizaciones y movimientos en toda la sociedad civil de modo de reforzar los valores comunes y facilitar la ayuda mutua cuando personas u organizaciones enfrenten represión o carencias de recursos. Las iniciativas de fomento del liderazgo no deben limitarse al desarrollo de capacidades de gestión, sino que deben inculcar capacidades para la toma de decisiones ética, una visión del liderazgo guiado por valores y valentía para mantenerse fiel a principios aún bajo presión.

Por último, debe quedar claro que el modelo de financiación basado en las contribuciones de donantes ha alcanzado sus límites. Las fuentes de financiación en que los grupos de la sociedad civil han confiado durante mucho tiempo son cada vez menos fiables, están limitadas por motivos políticos o no se ajustan a las necesidades actuales. Ya sea que provenga de agencias bilaterales o multilaterales o de iniciativas filantrópicas privadas, la financiación a menudo reproduce los desequilibrios de poder político y económico, y puede resultar en una sociedad civil estructurada en torno de proyectos e incapaz de enfrentarse al poder.

Por esta razón, la sociedad civil debe desarrollar **modelos de financiación más diversificados y sostenibles**. Esto incluye valorar estrategias de financiación de base comunitaria, como los modelos de membresía, financiación colectiva (crowdfunding) o fundaciones comunitarias, desarrollar actividades empresariales y de inversión éticas alineadas con las misiones de las organizaciones para generar ingresos ilimitados, y aprovechar recursos no financieros mediante el voluntariado calificado, los bancos de tiempo y el intercambio de recursos. Por necesidad, muchos grupos de la sociedad civil, especialmente en el sur global, ya han probado estos enfoques, diversificando el riesgo financiero, aumentando su independencia y rindiendo cuentas ante las comunidades a las que sirven en vez de a donantes externos. La sociedad civil en su conjunto puede aprender de estos ejemplos.

Es hora de dejar atrás las meras estrategias de supervivencia y la esperanza de volver a la antigua normalidad y, en cambio, reimaginar una sociedad civil adaptada a una época marcada por crisis múltiples, transversales y vertiginosas. Una sociedad civil concebida como movimiento, liderada por la comunidad, enfocada en la producción de narrativas, preparada para la resistencia, unida en redes, con principios sólidos e independencia financiera podrá resistir mejor a las amenazas actuales y materializar su misión colectiva de crear un mundo más justo, igualitario, democrático y sostenible.



CONFLICTO: LA LEY DEL MÁS FUERTE



EN NUMEROSOS CONFLICTOS SE ESTÁ VIOLANDO SISTEMÁTICAMENTE EL DERECHO INTERNACIONAL, SE ATACA DELIBERADAMENTE A LA POBLACIÓN CIVIL Y SE COMETEN CRÍMENES DE GUERRA CON IMPUNIDAD.



MUJERES Y NIÑOS SE LLEVAN LA PEOR PARTE EN LAS ZONAS DE CONFLICTO, Y LAS ORGANIZACIONES LIDERADAS POR MUJERES DESEMPEÑAN UN ROL CRUCIAL PERO NO RECONOCIDO EN LA RESPUESTA HUMANITARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ.



PESE A ENFRENTAR RESTRICCIONES CRECIENTES, LA SOCIEDAD CIVIL CONTINÚA TRABAJANDO PARA DETENER EL ENVÍO DE ARMAS A PERPETRADORES DE ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS, GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR VIOLACIONES DE DERECHOS Y CREAR COALICIONES A FAVOR DE LA PAZ.

Los conflictos dejan cicatrices en el mundo. Cuando se publicó este informe, en Gaza se mantenía vigente un frágil y muy dudoso alto al fuego, y en Ucrania, bajo la presión del gobierno de Trump, podría producirse un cese de las hostilidades que satisfaría las ambiciones imperialistas de Rusia y sacrificaría la soberanía de Ucrania en el proceso. No obstante, aunque pasan desapercibidos, otros conflictos siguen causando estragos en países como **Etiopía**, **Birmania**, **Sudán**, **República Democrática del Congo (RDC)**, dejando tras ellos muerte y destrucción de una escala inimaginable, desplazamientos masivos y secuelas traumáticas duraderas.

En todos estos conflictos no se está matando a civiles por accidente, sino de forma deliberada. Los profesionales del periodismo y el personal humanitario y de la sociedad civil son asesinados por defender derechos, documentar abusos y ayudar a la población civil. También se incumplen impunemente los **principios del derecho internacional humanitario**, establecidos desde hace mucho tiempo para proteger y minimizar el sufrimiento humano. Mientras tanto, las instituciones de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales parecen impotentes, y la ley del más fuerte se impone al derecho internacional.

Gaza, zona cero

En ningún lugar la devastación ha sido tan grande como en Gaza. Actualmente, el número de personas que han perdido la vida en los ataques de Israel asciende a por lo **48.291**, la mayoría civiles, pero podrían ser muchos más. Al menos **1,9 millones de personas**, el 90% de la población, se han visto desplazadas, y el 92% de las viviendas han quedado destruidas o muy dañadas. Unos **170 periodistas** y al menos **320 trabajadores humanitarios** han sido asesinados, muchos de ellos de manera deliberada. Las secuelas traumáticas perdurarán durante generaciones y no cabe duda de que las consecuencias de las decisiones genocidas de los dirigentes israelíes fomentarán una mayor inestabilidad y contribuirán a crear un clima de impunidad en todo el mundo.

Afortunadamente, el alto el fuego acordado en enero de 2025, con la mediación de Egipto, Catar y Estados Unidos, frenó la matanza, si bien fue violado en repetidas ocasiones, como cuando Israel volvió a **bloquear el acceso humanitario**. Cuando se escribió este informe, aún se desconocía si se respetarían la segunda y la tercera fases de la tregua, a saber, un alto el fuego permanente y la reconstrucción.

El acuerdo que finalmente aceptó Israel era muy similar al que Hamás acordó en mayo de 2024 y presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU mediante una resolución en junio, que Israel ignoró. La masacre fue una decisión política, ya que el acuerdo se podría haber firmado **mucho antes** y se podrían haber ahorrado muchas vidas. Fue el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien decidió castigar colectivamente a toda una población —un crimen de guerra— por las acciones de un grupo terrorista, sin realmente intentar limitar las consecuencias para la población civil. Si ya era impopular antes de los atentados del 7 de octubre y aún tiene juicios pendientes por corrupción, Netanyahu ha recibido nuevas críticas por el fracaso del vasto sistema de seguridad israelí. Aun así, la guerra ha mantenido unido a su gobierno y le ha permitido mantenerse en el poder.

El gobierno de Joe Biden ofreció cobertura diplomática y armas a Israel,

pero el regreso de Trump hace ahora menos probable la consecución de una paz duradera. Trump parece concebir la reconstrucción de Gaza como un proyecto inmobiliario para construir una segunda Dubái tras un proceso de limpieza étnica de la población gazatí restante, a la que expulsará a otros países. Esta forma de pensar implica ideas sumamente contradictorias: por un lado, reconoce que la destrucción de Gaza requiere una reconstrucción completa y, por otro, rechaza la posibilidad de que un daño tan grande pueda constituir una prueba de crímenes contra los derechos humanos.

Israel también ha llevado la violencia a Cisjordania y ha segado vidas en el Líbano con sus bombardeos. Además, ha aprovechado el **derrocamiento de Bashar al-Assad** en Siria, en diciembre, para invadir los territorios de los Altos del Golán que aún no ocupaba. Más recientemente, en febrero de 2025, lanzó otra **campaña de bombardeos** contra Siria.

A nivel nacional, en Israel la violencia ha ido acompañada de una **represión constante**. Desde el inicio de la actual fase del conflicto, el gobierno ha aprobado **al menos 19** normas de excepción que restringen libertades fundamentales. Las autoridades israelíes han recurrido sistemáticamente a la violencia contra manifestantes y trabajadores de los medios que cubrían las protestas, y han sometido a ciudadanos palestinos de Israel a vigilancia y detenciones arbitrarias, incluso por cargos de terrorismo.

En este aspecto, Israel tiene mucho en común con Rusia, cuyo Estado autoritario ha impuesto un **aluvión de nuevas restricciones** para reprimir el disenso interno durante su invasión a gran escala de Ucrania, al tiempo que difunde incesantemente un relato falso en el que Rusia es la víctima y no el agresor. De la misma manera, la población civil ucraniana también ha sido **blanco sistemático** de mortíferos ataques rusos contra hospitales, zonas residenciales y otras infraestructuras no militares.

Las restricciones impuestas por Israel han tenido repercusión en

todo el mundo. En al menos doce países europeos, las autoridades han **prohibido** las manifestaciones en solidaridad con Palestina y han difamado, agredido y detenido a muchos de los manifestantes. **Alrededor del 10%** de todas las violaciones del espacio cívico registradas por CIVICUS Monitor en 2024 estaban relacionadas con Israel, Palestina y las manifestaciones de solidaridad en todo el mundo.

En muchos **campus estadounidenses**, los estudiantes montaron campamentos de protesta por diversos motivos, entre ellos que cesen las inversiones en empresas vinculadas a Israel. En reacción, muchas instituciones prohibieron las acampadas, impusieron restricciones y suspendieron a estudiantes. Además, los estudiantes que protestaban fueron agredidos por las fuerzas de seguridad y acusados de antisemitismo, y a algunos les **retiraron ofertas de trabajo** tras participar en las acampadas.

Artistas de todo tipo también están documentando el sufrimiento y contando lo que sucede en Gaza. Aunque resulte difícil de creer, hay artistas gazatíes creando arte en medio de la destrucción, y personas creativas de todo el mundo están expresando su solidaridad. Sin embargo, también están sufriendo represalias por expresar su apoyo. Los están excluyendo de eventos, les están retirando premios y les están cancelando contratos. Todo esto puede fomentar la autocensura. De igual manera, quienes se manifiestan contra el genocidio en los medios de comunicación lo tienen cada día más difícil. Por un lado, las redes sociales **censo** a quienes se solidarizan con Palestina y, por otro, se multiplican los discursos de odio. El derecho a hablar sobre Palestina pone a prueba el respeto de las libertades, y lamentablemente, demasiadas personas en posiciones de poder no están pasando la prueba.

Las mujeres en primera línea

La mayoría de las personas asesinadas por las fuerzas israelíes en



Visitantes contemplan un cuadro que representa el sufrimiento de la guerra en una exposición de mujeres artistas palestinas en Deir Al-Balah, Gaza, 10 de diciembre de 2024.

Foto de Saeed Jaras/Middle East Images/AFP via Getty Images.

Gaza han sido **mujeres y niños**. Es repugnante constatar que las mujeres y las niñas suelen ser las que se llevan la peor parte en los conflictos armados de todo el mundo. De hecho, el número de mujeres y niñas afectadas por los conflictos batió un récord, llegando a casi **612 millones**.

En **Sudán**, ambos bandos de la brutal guerra civil están llevando a cabo una campaña de violencia sexual sistemática que incluye agresiones sexuales, secuestros y matrimonios forzados. También han aumentado los matrimonios infantiles y la explotación y el tráfico sexuales.

En situaciones de conflicto, las mujeres suelen ser las primeras en pasar hambre y a las niñas se les niega el acceso a la educación mucho más que a los niños. Las mujeres supervivientes tienen pocas esperanzas de que la justicia obligue a rendir cuentas a quienes les infligieron tanta crueldad.



Una mujer con una uña pintada con la bandera sudanesa sostiene un cartel en una protesta en Ginebra, Suiza, 14 de agosto de 2024.

Las mujeres no son sólo víctimas de los conflictos, sino también una parte vital, aunque poco reconocida, de la solución. En Sudán, las organizaciones locales de mujeres desafían innumerables peligros para brindar ayuda esencial, gestionar refugios, mantener clínicas en campos de refugiados y brindar apoyo psicosocial a sobrevivientes. También documentan y denuncian atrocidades y abusos de derechos humanos, lideran campañas de incidencia internacional y exigen que se haga justicia.

Las organizaciones dirigidas por mujeres deberían estar en primera línea de las iniciativas para la paz. Sin embargo, suelen quedar excluidas de los procesos para la consolidación de la paz. Está demostrado que los acuerdos de paz son más duraderos y se aplican de manera más efectiva cuando las mujeres participan en ellos. Pese a esto, como muestra el **informe anual de la ONU** sobre mujeres, paz y seguridad, actualmente solo el 9,6% de los negociadores de paz son mujeres.

Cualquier esfuerzo significativo para construir una paz duradera requiere la participación sustancial de las mujeres en todo el proceso. En Siria, el cambio de gobierno tras una larga guerra civil ofrece una oportunidad única, ya que el éxito del nuevo régimen podrá medirse por su capacidad para fomentar los derechos de las mujeres en los procesos de paz.

La impunidad y el sistema global

Existe el riesgo de que nos adentremos en una era dominada por la impunidad, ya que los responsables de los conflictos pueden evitar rendir cuentas con demasiada facilidad. Incluso cuando se produce un alto el fuego y cesan las hostilidades, es poco probable que los culpables de atrocidades perpetradas en masa se enfrenten a la justicia.

El corpus del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial se concibió

para impedir que atrocidades como las cometidas por la Alemania nazi y sus aliados volvieran a repetirse y, en caso de que lo hicieran, garantizar que se castigara a los responsables. Sin embargo, el derecho internacional y las instituciones encargadas de aplicarlo están siendo puestos a prueba por conflictos en los que los agresores actúan con impunidad, mientras los Estados hacen cálculos hipócritas basados en alianzas políticas y no en principios jurídicos.

El Consejo de Seguridad ha demostrado ser tan ineficaz con Israel como lo ha sido con Rusia, en ambos casos debido al poder de veto de sus cinco miembros permanentes. Rusia ha impedido cualquier acción contra su flagrante violación del mandato del Consejo, mientras que Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha bloqueado sistemáticamente cualquier acto de condena contra su ofensiva desde el inicio del bombardeo de Gaza. Si bien el Consejo de Seguridad ha emitido unas cuantas resoluciones descafeinadas, muy diluidas por los enfrentamientos diplomáticos, el gobierno israelí ha logrado ignorarlas con facilidad. A falta de medidas del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de la ONU ha emitido resoluciones, aunque sin mecanismos para garantizar su cumplimiento.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, al menos actuó con rapidez en enero de 2024, cuando dictó **medidas provisionales urgentes** en el marco de un caso presentado por Sudáfrica contra Israel por incumplir la Convención sobre el Genocidio. El tribunal consideró que existía un riesgo verosímil de que se estuviera cometiendo un genocidio y dio seis órdenes a Israel, entre ellas, “tomar todas las medidas a su alcance” para garantizar que sus fuerzas respeten la Convención sobre el Genocidio, facilitar el acceso de la ayuda humanitaria y poner fin a las incitaciones públicas al genocidio. Sin embargo, Israel se limitó a ignorarlas, como ya había hecho anteriormente cuando el tribunal emitió nuevas órdenes en marzo y mayo. Lo mismo hizo en julio, cuando la CIJ emitió un **dictamen consultivo** en otro caso, en el que concluyó que los asentamientos ilegales israelíes vulneran múltiples disposiciones del derecho internacional. Netanyahu **arremetió** contra

la decisión, al tiempo que el Consejo de Seguridad no ha investigado el incumplimiento de las órdenes de la CIJ por parte de Israel.

Está claro que se está aplicando un doble rasero. Prueba de ello, es que varios Estados del norte global, que **apoyaron** la demanda **presentada** por Gambia contra Birmania por violar la Convención sobre el Genocidio, **criticaron** a Sudáfrica por presentar una demanda contra Israel.

También está la Corte Penal Internacional (CPI), que procesa a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión, y que funciona como tribunal mundial de último recurso cuando la justicia nacional no actúa. En noviembre, la institución dictó **órdenes de detención** contra Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y tres dirigentes de Hamás ya fallecidos. La CPI halló motivos razonables para creer que Gallant y Netanyahu eran responsables del “crimen de guerra de usar el hambre como herramienta de guerra” y de “crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

Todo Estado que haya adoptado el Estatuto de Roma y reconoce la jurisdicción de la CPI tiene la obligación de detener a Netanyahu si visita su país. Sin embargo, varios Estados del norte global afirmaron que no lo detendrían o se desmarcaron de la decisión del tribunal. Como en el caso de Alemania, donde Friedrich Merz, probablemente el próximo canciller alemán, **aseguró** a Netanyahu que podría visitar el país sin temor a ser detenido. Las tornas han cambiado desde 2023, cuando la CPI emitió órdenes de detención contra Vladimir Putin y un socio suyo, y casi todos los Estados del norte global la apoyaron y exigieron justicia.

Mientras tanto, el Estado israelí ha puesto en marcha una **vasta campaña de artimañas** contra la CPI, entre ellas actos de piratería informática, vigilancia, difamación y amenazas. Netanyahu reaccionó a las órdenes de detención **comparando** al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, con un juez nazi. Una de las primeras medidas de Trump

durante su segundo mandato fue **imponer sanciones** al personal de la CPI, como ya había hecho durante su primer mandato.

La CPI ha dejado claro que ser un aliado clave de una potencia del norte global no garantiza necesariamente la impunidad, y la respuesta ha sido reveladora. La idea de un orden internacional basado en normas no puede sostenerse si los Estados eligen cuándo aplicarlas en función de sus lealtades.

Muchos Estados del norte global también se han mostrado dispuestos a creer las **calumnias del gobierno israelí** sobre la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, que Israel busca dismantelar. Cancelaron o suspendieron la financiación basándose en afirmaciones del gobierno israelí que resultaron ser mayoritariamente infundadas, lo que causó un gran daño a la población.

Este patrón de disfuncionalidad y egoísmo manifiesto también se ha observado en otros conflictos. En Birmania, desde el golpe militar de 2021, se han sucedido los enfrentamientos durante más de cuatro años: las fuerzas opositoras a la junta controlan ahora la mayor parte del territorio y los militares están respondiendo con una represión brutal. Pese a esto, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el principal organismo de la región, **se mantiene al margen** y sus Estados miembros con regímenes autoritarios se contentan con fingir que el plan presentado tras el golpe sigue siendo creíble, ignorando las alternativas propuestas por la sociedad civil y contribuyendo así a que las masacres continúen.

En todas partes, los intereses y las alianzas de los Estados están impidiendo el progreso. El régimen autoritario de Ruanda es la **potencia detrás de las fuerzas rebeldes** que se hicieron con el control la ciudad de Goma en la RDC en enero de 2025, pero muchos Estados del norte global están priorizando sus relaciones diplomáticas por sobre el reclamo de rendición de cuentas. El conflicto también **continúa** en algunas regiones de Etiopía, pero el gobierno ha



Una imagen del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto con una petición de su arresto son proyectadas en un edificio cercano a la Casa Blanca mientras éste se reúne con Donald Trump en Washington D. C., Estados Unidos, 4 de febrero de 2025.

aprovechado sus relaciones para limitar el escrutinio internacional, y la Unión Africana y la ONU por lo general han guardado silencio. Mientras tanto, la guerra civil hace estragos en Sudán, en parte porque Emiratos Árabes Unidos (EAU) **apoya** firmemente a las milicias que buscan remplazar al gobierno.

La sociedad civil pide que se respete el derecho internacional, que el sistema institucional internacional desempeñe su función y que los Estados dejen de lado sus intereses nacionales particulares. En este sentido, es prometedora la **propuesta de un tratado** para prevenir y castigar los crímenes contra la humanidad. En diciembre de 2024, la ONU adoptó una resolución para presentar un borrador final en 2029. El tratado obligaría a los Estados a cooperar para proteger a las víctimas y testigos de estos crímenes, y para procesar o extraditar a los sospechosos. No obstante, su adopción enfrenta una fuerte oposición, en particular por parte de Rusia, que obtuvo concesiones sobre la



Exiliados sudaneses denuncian la escalada de violencia y el rol de los Emiratos Árabes Unidos como proveedor de armas y municiones a las Fuerzas de Apoyo Rápido en una manifestación en Londres, Reino Unido, 21 de enero de 2024.

formulación de la resolución y los plazos antes de su adopción.

La sociedad civil ha desempeñado un papel clave en la defensa del tratado, instando a los gobiernos a respaldarlo y redactando y proponiendo artículos. A pesar de sus imperfecciones y limitaciones, el derecho internacional es la única alternativa a un mundo anárquico en el que los poderosos imponen su voluntad sin restricciones. Los Estados que apoyan un tratado sobre crímenes contra la humanidad deben colaborar con la sociedad civil para evitar que se retrase su adopción o que se quede vacío de contenido.

Incidencia contra el comercio de armas

La sociedad civil también defiende el derecho internacional presionando para que se detengan los envíos de armas a Israel. El Tratado sobre el Comercio de Armas, que entró en vigor en 2014, fue concebido para impedir los envíos de armas que puedan dar lugar a violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Especialistas en derechos humanos de la ONU han **pedido** el cese inmediato de todas las exportaciones de armas a Israel, puesto que existe el riesgo de que su uso viole el derecho internacional humanitario. Estados como Bélgica, Canadá, España y Japón han suspendido sus envíos, pero muchos otros no lo han hecho.

En varios países europeos, la sociedad civil ha **acudido a los tribunales** para intentar frenar el suministro de armas, como en el caso de **Alemania**, el **segundo mayor proveedor** de armas a Israel después de Estados Unidos, así como en Dinamarca, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido. Un aspecto crucial es el suministro de piezas para los aviones de combate F-35, armamento clave en la ofensiva israelí contra la población civil.

En febrero de 2024, un tribunal de los Países Bajos **ordenó** al gobierno neerlandés que detuviera el suministro de todas esas

piezas, ya que consideraba que existía un riesgo claro de que se violara el derecho internacional humanitario. El tribunal también rechazó la petición del gobierno de ignorar las pruebas presentadas por la sociedad civil. Pese a esto, el gobierno presentó un recurso ante el Tribunal Supremo para que anulara la sentencia.

En Dinamarca, si bien el juicio sigue en curso, fue notable la rapidez con la que la **ciudadanía respondió** a la campaña de recolección de fondos para emprender la acción. Mientras tanto, en el Reino Unido, tras una **intensa labor de incidencia de la sociedad civil**, el gobierno anunció en septiembre una **suspensión parcial** de la venta de armas a Israel. Sin embargo, esta medida solo implicaba la cancelación de una treintena de los 350 permisos de exportación de armas y no incluía las piezas que se suministran a los países que ensamblan los F-35, pese a que el 15% de esas piezas proceden del Reino Unido. La legislación británica es clara en cuanto al cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas y la sociedad civil sigue emprendiendo acciones legales.

De manera más general, la sociedad civil trabaja para enfocar la atención pública en el mortífero comercio de las armas. El gasto militar mundial ha aumentado durante **nueve años consecutivos** hasta alcanzar los 2, 300 billones de dólares anuales, y el valor total de las importaciones y exportaciones de armas entre Estados se estima en al menos **138.000 millones de dólares**. Estados Unidos es el mayor exportador de armas, seguido de Francia, Rusia, China y Alemania, que en conjunto son responsables de las tres cuartas partes de las exportaciones de armas.

Es probable que el gasto en armamento aumente. Por un lado, el gobierno de Trump está presionando a los miembros de la OTAN para que gasten más en defensa y, por otro, puede que el temor actual de los Estados europeos de **perder el amparo** de Estados Unidos en materia de defensa también los lleve a aumentar el presupuesto para sus propios sistemas de defensa. En este sentido, en febrero de 2025 el gobierno del Reino Unido **anunció** que incrementaría su

gasto en defensa en detrimento de su presupuesto de ayuda exterior, priorizando así las armas por sobre el apoyo a las personas más vulnerables del mundo.

Hay múltiples conflictos, como los de Gaza, Birmania y Sudán, en los que está claro que los Estados suministran armas para usos que violan el derecho internacional. Por ejemplo, China, India y Rusia suministran armas a la junta homicida de Birmania, mientras que los Emiratos Árabes Unidos abastecen a las fuerzas rebeldes que están asesinando a civiles en Sudán. Aunque 116 países han ratificado el Tratado sobre el Comercio de Armas, su aplicación a nivel mundial está muy lejos de ser completa. Entre los principales países que se resisten a aplicarlo se encuentran Rusia y Estados Unidos. En este contexto, la sociedad civil, que fue una de las principales impulsoras del tratado, sigue trabajando para reforzar las normas internacionales y supervisar de forma más estricta el envío de armas con el fin de proteger los derechos humanos.

La tecnología, que está avanzando a un ritmo mucho más rápido que su regulación, está siendo utilizada para facilitar el asesinato. En ese sentido, preocupa especialmente el **uso de la IA en armas autónomas**. Países de todo el mundo están integrando la IA en sus sistemas militares, incluso en procesos en que se decide quién vive y quién muere, reduciendo así el espacio para la conciencia humana. A esto se añade el hecho de que los datos erróneos o sesgados pueden tener un elevado costo humano.

Israel utiliza la IA para **generar listas** de objetivos a los que asesinar que acaban en la muerte de civiles. También se ha acusado al Ejército israelí de ampliar sus criterios para decidir quién constituye un objetivo válido, violando así el derecho internacional y, en definitiva, aumentando el número de objetivos para ajustarse a su capacidad para matar. Los soldados solo disponen de unos segundos para aprobar o rechazar una propuesta de asesinato generada por un sistema informático. En situaciones como esta, el uso de violencia letal se deshumaniza aún más, ya que se elimina de la ecuación a los

responsables de apretar el gatillo, una práctica que comenzó con el uso de drones teledirigidos en conflictos bélicos. Por estos motivos, urge una regulación internacional eficaz para prácticas como estas, incluido el posible uso de **robots asesinos**.

Un mundo en plena reconfiguración

Los **primeros días del gobierno de Trump** provocaron un tsunami disruptivo en todo el mundo. Rusia y Estados Unidos mantuvieron conversaciones sobre Ucrania, sin la presencia de Ucrania. Acto seguido, Trump y su vicepresidente J. D. Vance acosaron vilmente a Volodymyr Zelenskyy durante una reunión televisada. El gobierno estadounidense no ha intentado ocultar que su apoyo a Ucrania depende del acceso privilegiado a sus recursos minerales, poniendo así en evidencia sus intereses particulares y su visión transaccional de la política. Estados Unidos también hizo algo que hasta hace poco parecía impensable: se unió a Bielorrusia, Corea del Norte y Rusia al **votar en contra** de la resolución de la Asamblea General de la ONU que condenaba la invasión rusa. Mientras tanto, Estados Unidos sigue insinuando que desearía anexionarse Canadá y **Groenlandia**, recuperar el control del Canal de Panamá y “adueñarse” de Gaza.

En este mundo en el que el poder reemplaza al derecho, casi todo es posible. Esto implica una alianza entre Rusia y Estados Unidos, así como la división del mundo en esferas de influencia centradas

en China, Estados Unidos y Rusia, bajo la amenaza constante de conflictos para asegurarse el dominio regional. La guerra con Ucrania podría llevar a Rusia a creer que puede intervenir militarmente en territorios cercanos a sus fronteras, mientras que China podría interpretar la situación como una señal para seguir adelante con sus planes de invadir Taiwán, una decisión que desestabilizaría Asia y generaría inseguridad entre los numerosos vecinos de China.

Sin embargo, el realineamiento internacional también puede provocar cambios repentinos que creen oportunidades locales. En el caso de Siria, las **dinámicas y prioridades cambiantes** de Irán, Israel, Líbano, Rusia y Turquía, incluso como consecuencia de los conflictos en los que están implicados, contribuyeron a crear condiciones para un cambio. Además de exigir el cumplimiento de las normas internacionales, instar a la regulación del comercio de armas y exigir responsabilidades a los culpables, la sociedad civil mundial y las instituciones internacionales deben responder con rapidez cuando surja una oportunidad.

En Siria, como en tantos otros escenarios de conflicto, la sociedad civil desempeñó un **papel fundamental** prestando apoyo vital sobre el terreno, documentando violaciones de derechos humanos y solicitando ayuda internacional, pero pagó un precio muy alto por ello. Ahora la sociedad civil siria necesita apoyo para construir una paz inclusiva, justa y democrática en la que se respeten los derechos humanos. En Siria y en otras zonas de conflicto, todos los caminos hacia una paz sostenible pasan por la sociedad civil.



DEMOCRACIA: REGRESIÓN Y RESILIENCIA



EL POPULISMO DE DERECHA, LA INJERENCIA EXTRANJERA Y LA DESINFORMACIÓN ESTÁN SOCAVANDO LOS CIMIENTOS DE LA DEMOCRACIA, PROVOCANDO UNA SIGNIFICATIVA REGRESIÓN DEMOCRÁTICA.



LAS TRANSICIONES PACÍFICAS Y EL ÉXITO DE LAS MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LOS VALORES Y LAS PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS SON UNA MUESTRA DE LA RESILIENCIA DE LA DEMOCRACIA.



LA SOCIEDAD CIVIL DESEMPEÑA UN PAPEL CLAVE EN LA OBSERVACIÓN ELECTORAL, LA LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN, LA PARTICIPACIÓN INCLUSIVA Y LA MOVILIZACIÓN CONTRA LOS RETROCESOS.

El posible realineamiento global en curso y las decisiones que se están tomando en torno de los conflictos dan muestra de la importancia de las elecciones políticas. Las decisiones que los votantes toman en las urnas —y las que no pueden tomar cuando la democracia les es retaceada— pueden tener repercusiones globales.

El 2024 fue anunciado como un “super año electoral” en el que alrededor de la mitad de la población mundial tendría la oportunidad de votar. Siete de los diez países más poblados celebraron elecciones nacionales, pero solo cuatro de ellos —Estados Unidos, India, Indonesia y México— garantizaron la posibilidad de alternancia por la vía electoral, un requisito básico de la democracia. Alrededor de cuatro de cada diez personas con derecho a voto vivían en países donde no se cumplían las condiciones básicas para celebrar elecciones libres y competitivas, y muchas más participaron en procesos democráticos altamente defectuosos. Solo **una minoría** pudo votar en democracias plenas, caracterizadas por el respeto incondicional de las libertades civiles y políticas.

A lo largo del año se hizo patente la vulnerabilidad de la democracia frente a los discursos antiderechos, la desinformación y la interferencia

extranjera. Pero también se evidenció su resiliencia y su potencial para generar cambios. Aunque abundaron los casos de elecciones fraudulentas o fuertemente controladas para preservar el poder autoritario, como ocurrió en Rusia y Venezuela, también hubo muchos ejemplos de alternancia y transiciones pacíficas, como se observó en Botsuana y Senegal, así como de movilizaciones en defensa de la democracia, como ocurrió en Corea del Sur y Guatemala.

Cuando las elecciones fueron lo suficientemente libres y competitivas como para reflejar el sentir de la ciudadanía, el descontento económico se tradujo a menudo en el rechazo de los oficialismos y la búsqueda de novedades políticas, lo cual continuó beneficiando a candidatos nacionalistas y populistas de derecha. Hay una clara **señal de alerta**: incluso en sistemas aparentemente estables, si los partidos tradicionales no conectan con el descontento popular, tomarán la delantera los partidos populistas.

El populismo de derecha en ascenso

En muchos países, el populismo de derecha lleva ya tiempo desplazándose de los márgenes hacia el centro de la escena política, suscitando temores por un posible retorno del fascismo. Como está demostrando actualmente Estados Unidos con el aluvión de **decretos** de Trump, los líderes populistas pueden ganar elecciones democráticas y luego convertirse en una **seria amenaza** para la democracia. En esta ocasión, los electores sabían lo que votaban y la mayoría dio su voto a Trump, quien ahora controla los tres poderes del Estado. Puede que su personalidad sea única, pero su campaña se basó en gran medida en viejas tácticas populistas caracterizadas por combinar narrativas nacionalistas y antinmigración y tópicos de la batalla cultural con el telón de fondo de la ansiedad económica.

Su caso dista de ser único. La extrema derecha forma **parte del gobierno** formado en Holanda en abril, después de que el Partido

por la Libertad quedara primero en las **elecciones** de diciembre de 2023. El partido controla ministerios clave, incluidos los de **inmigración** y desarrollo internacional. En **Croacia**, el Movimiento Nacional de extrema derecha entró en el gobierno tras las **elecciones parlamentarias** de abril.

Incluso cuando no alcanzan el poder, los populistas de derecha influyen en el debate político, empujando la política en su dirección a medida que los partidos mayoritarios se adaptan. Atacan sistemáticamente a los grupos excluidos, a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil, erosionando las normas democráticas y los mecanismos de control.

En Austria, en las **elecciones** de septiembre, el Partido de la Libertad, de extrema derecha, consiguió el primer puesto con el 29% de los votos, gracias a una campaña centrada en la seguridad de las fronteras y la **retórica antiinmigración**. Pese a que tres partidos mayoritarios dejaron de lado sus diferencias y **formaron una coalición**, el Partido de la Libertad seguirá teniendo una voz influyente desde los márgenes. Asimismo en Alemania, Alternativa para Alemania (AfD) se convirtió en septiembre en el primer partido de extrema derecha en conseguir el mayor número de escaños en elecciones estatales, algo que ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque hasta ahora las principales formaciones políticas **se han negado** a firmar acuerdos de coalición con el partido antiinmigración, este **mantiene una enorme influencia** en el debate público. En febrero de 2025, AfD quedó en el segundo puesto en las elecciones federales, con más del 20% de los votos. Fue su **mejor resultado** a nivel nacional hasta la fecha, y aspira a llegar al poder en las próximas elecciones.

En **Francia**, el partido ultraderechista Agrupación Nacional sigue suscitando preocupación tras quedar en primer lugar en las elecciones al Parlamento Europeo de junio. En reacción, el presidente Emmanuel Macron decidió convocar elecciones parlamentarias anticipadas. En respuesta, la **sociedad civil** y una coalición de

partidos de izquierda inusualmente sólida se movilizaron y dejaron a la Agrupación Nacional decepcionada con el resultado final. Pese a esto, cabe destacar que el partido ha ido ganando en votos de forma constante a lo largo de los años y que espera quedar en el primer lugar en la próxima cita electoral. En **Portugal**, en las elecciones parlamentarias de marzo, el partido de extrema derecha Chega logró un gran avance con el 18% de los votos, reflejo del gran **descontento** por la corrupción y el estancamiento económico.

Injerencia y desinformación

Los populistas y nacionalistas de derecha suelen beneficiarse de iniciativas concertadas de desinformación. Rusia suele realizar esfuerzos de injerencia electoral, especialmente en Europa del Este, para impulsar a políticos prorrusos y desestabilizar a las fuerzas políticas favorables a la Unión Europea (UE). La sociedad civil desempeña un papel crucial a la hora de identificar y contrarrestar estas maniobras, si bien la eficacia de sus acciones depende a menudo del apoyo de socios estatales e internacionales.

En **Rumania**, el candidato nacionalista de extrema derecha Călin Georgescu ganó inesperadamente la primera vuelta de las elecciones presidenciales gracias a campañas en redes sociales dirigidas a los votantes más jóvenes descontentos con la política tradicional. Pero el Tribunal Constitucional tomó una medida extraordinaria: anuló los resultados sobre la base de documentos desclasificados de los servicios de inteligencia que demostraban que Rusia había orquestado una campaña de injerencia para influir en las elecciones.

La vecina **Moldavia** también experimentó injerencia rusa durante sus elecciones presidenciales y un referéndum de adhesión a la UE. Entre las tácticas utilizadas se destacaron las presiones económicas, los ciberataques, la compra de votos, las amenazas de violencia y la desinformación, que incluyó la difusión de videos falsos desde



Manifestación contra las irregularidades electorales que favorecieron al partido gobernante celebrada frente al parlamento en Tiflis, Georgia, 28 de octubre de 2024.

cuentas ficticias. A pesar de todo, los votantes **respaldaron** el acercamiento a la UE, pero ambas votaciones estuvieron mucho más reñidas de lo esperado.

En **Lituania**, cuyo gobierno apoya firmemente a Ucrania, se han llevado a cabo campañas de desinformación similares en el marco de varias citas electorales, incluidas las elecciones presidenciales y legislativas. Mientras tanto, en Austria, la difusión de información falsa sobre la supuesta intención de los partidos mayoritarios de hacer obligatoria la vacunación influyó en los resultados electorales.

La injerencia rusa también tuvo repercusiones en **Georgia**. El partido Sueño Georgiano se alzó con la victoria en las elecciones parlamentarias de octubre en un contexto marcado por las **acusaciones de fraude**. Si bien la formación política dice apoyar la adhesión a la UE, se muestra cada vez más cercana a Rusia.

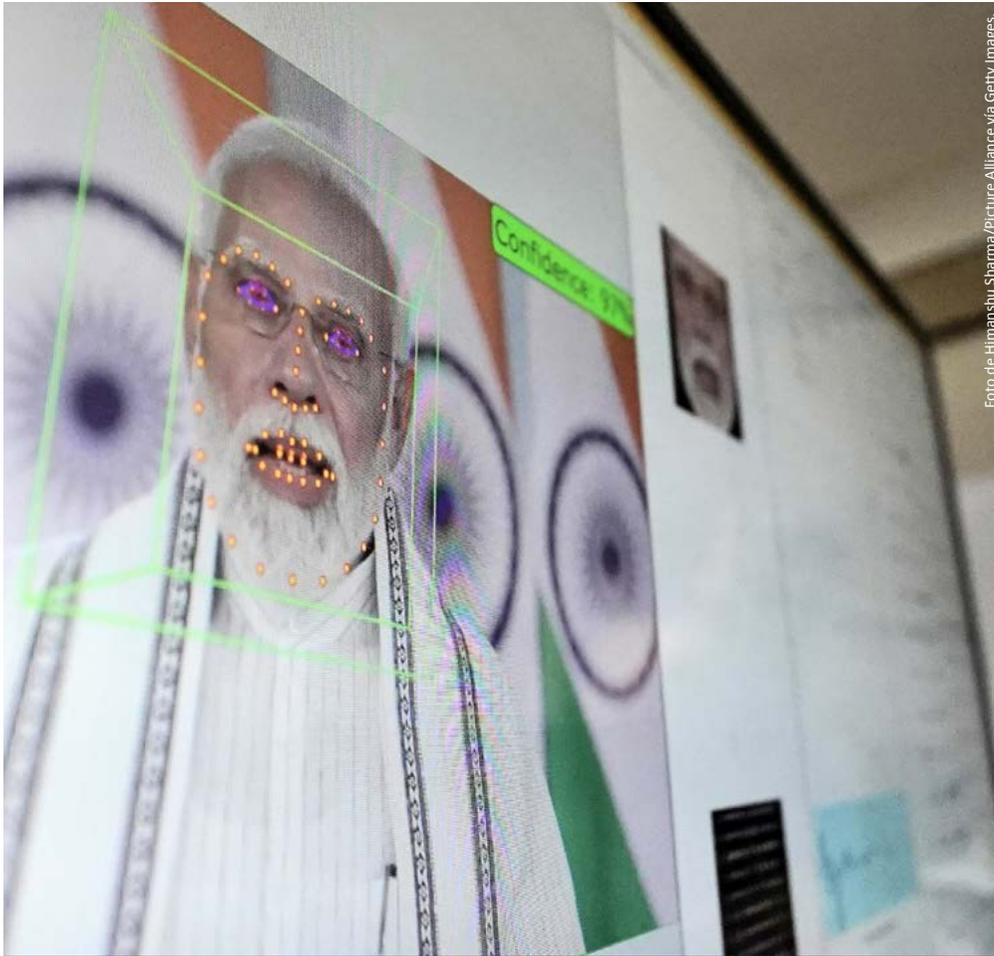


Foto de Himanshu Sharma/Picture Alliance via Getty Images.

Representantes de una empresa de inteligencia artificial que crea videos deepfake para campañas electorales muestran a posibles clientes un avatar del primer ministro indio Narendra Modi en Ajmer, India, 15 de mayo de 2024.

Anteriormente, el partido ya había aprobado leyes inspiradas en la legislación rusa que restringían el papel de la sociedad civil, el trabajo de incidencia del colectivo LGBTQI+ y la labor de los medios de comunicación que reciben fondos del extranjero. En **Macedonia del Norte**🇲🇰, la desinformación prorrusa también jugó un papel importante en unas elecciones que desembocaron en la formación de un gobierno más alineado con Rusia.

En las elecciones de las **Islas Salomón**🇸🇻, cuyo gobierno ha estrechado vínculos con China, la desinformación pro-China fue la protagonista. No es de extrañar que ocurriera lo mismo en las **elecciones de Taiwán**🇹🇼.

Además de injerencias fomentadas por Estados, los procesos democráticos enfrentaron desafíos sin precedentes debido a las campañas de desinformación potenciadas por el uso de la IA y la manipulación en redes sociales. Esta fue una preocupación central durante los comicios celebrados en la **India**🇮🇳, los más multitudinarios de todo el año, durante los cuales se difundieron videos falsos y afirmaciones falaces sobre la oposición y la minoría musulmana para influir en el comportamiento de los votantes. La escala y la complejidad de estas campañas plantearon desafíos sin precedentes para los verificadores de datos y los funcionarios electorales.

La desinformación escapa a los intentos de controlarla y su difusión es hoy **más fácil y barata**🇨🇪 que nunca. Las redes sociales simplemente no se están esforzando lo suficiente para igualar la escala y la velocidad de las campañas de desinformación, sobre todo en contextos electorales y cuando están respaldadas por recursos estatales y personas adineradas. El reciente acercamiento de muchas empresas propietarias de redes sociales a Trump sugiere que el problema no hará más que empeorar.

Manipulación electoral y constitucional

Sin embargo, en muchos países las elecciones simplemente no tuvieron importancia. Quienes estaban en el poder las manipularon, vaciándolas de toda sustancia democrática real, con el fin de apartar a quienes pudieran hacerles sombra.

Las elecciones presidenciales **rusas**, celebradas en marzo, mostraron que el poder autoritario puede poner los procesos electorales a su servicio. Tras los cambios constitucionales de años anteriores, que permitieron a Vladimir Putin permanecer en el cargo, los comicios de 2024 confirmaron su permanencia en el poder. A los candidatos de la oposición se les impidió presentarse sistemáticamente mediante uso de tecnicismos legales o acusaciones penales. **Alexei Navalny**, el candidato que habría supuesto la mayor amenaza política para Putin, murió en circunstancias sospechosas en una prisión del círculo polar ártico poco antes de las elecciones. Además, la supervisión independiente de las elecciones estuvo muy restringida, y los medios de comunicación estatales dieron a Putin una cobertura sumamente positiva, al tiempo que marginaban o difamaban a los opositores.

En la vecina Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aliado de Putin, preparó su séptimo mandato mediante maniobras judiciales y una **intensa represión**. En el periodo previo a las **elecciones de enero de 2025**, las autoridades detuvieron a más de 1.200 personas, a muchas de ellas simplemente por participar en chats utilizados para organizar protestas tras el flagrante fraude electoral de 2020. Al no permitirse una verdadera oposición, todo fue una **puesta en escena**.

En Venezuela, las **elecciones presidenciales** de julio fueron uno de los ejemplos más lamentables del año de como las **esperanzas democráticas** pueden verse frustradas por un fraude flagrante. A pesar de que el gobierno **cerró el espacio cívico** y negó el derecho al voto a millones de venezolanos exiliados, la participación fue considerable y los indicios apuntaban a una victoria aplastante de la oposición. Sin embargo, el partido del gobierno se negó

a hacer públicos las actas de votación y otorgó la victoria sin presentar ninguna prueba. Las manifestaciones que se sucedieron a continuación fueron duramente reprimidas, pero aun así la ciudadanía siguió saliendo a las calles durante la **investidura de Nicolás Maduro** para su tercer mandato, que se celebró en medio de medidas de fuertes medidas de seguridad. Actualmente, Maduro está **reescribiendo la Constitución** con el fin de afianzar su control sobre un gobierno que no tiene intención de abandonar.

En África Occidental, los regímenes autoritarios siguen instrumentalizando las constituciones. En **Togo**, las recientes reformas constitucionales establecieron un sistema parlamentario en el que el presidente del Consejo de Ministros es elegido por el Parlamento y no mediante sufragio popular. Esta modificación permite al presidente Faure Gnassingbé, en el poder desde 2005, prolongar el control que ejerce su familia sobre el poder desde hace décadas. En **respuesta** a las manifestaciones, el gobierno decidió prohibirlas, disolver las reuniones de la sociedad civil, detener arbitrariamente a manifestantes y criminalizar a los periodistas que informaban sobre el descontento.

En el norte de África también hubo casos claros de manipulación. En las **elecciones** que se celebraron en septiembre en Argelia, se cambió la fecha para dificultar que los candidatos opositores pudieran postularse y hacer campaña, al tiempo que se encarcelaba a numerosos activistas, periodistas y políticos de la oposición, y se clausuraban organizaciones de la sociedad civil (OSC) y medios de comunicación independientes. De esta manera, sin una oposición real, el presidente Abdelmadjid Tebboune obtuvo un inverosímil 94,65% de los votos.

En octubre, en **Túnez**, el presidente Kais Saied se aferró al poder tras una modificación sistemática de las leyes para dismantlar los mecanismos de control democráticos. Su gobierno ha **encarcelado a opositores**, calificado de agentes extranjeros a las voces críticas y centrado la ira populista en **migrantes y refugiados** para desviar la

atención de los fracasos económicos. Con una oferta muy **limitada**, la participación fue sumamente baja.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele fue **reelecto** con un amplio margen de votos. No obstante, la contienda electoral no fue justa, ya que Bukele pudo presentarse gracias a **maniobras judiciales** que vulneraron la Constitución y se aprovecharon de los medios y recursos estatales. Si bien sus duras políticas contra la **violencia de las pandillas** le han granjeado el apoyo popular, también han supuesto el encarcelamiento masivo de decenas de miles de personas sin pruebas suficientes, mostrando un claro desprecio por las garantías procesales y derechos humanos fundamentales. A medida que se desmorona la independencia judicial y se desmantelan las salvaguardias constitucionales, El Salvador **se desliza hacia la autocracia**.

Gobierno militar y control autoritario

En varios Estados africanos, los gobiernos autoritarios suelen tomar la forma de regímenes militares.

En Burkina Faso, la junta que gobierna el país pospuso indefinidamente las elecciones, **alegando** que no eran una prioridad, y la sociedad civil, **fuertemente reprimida**, poco pudo hacer al respecto. En **Guinea**, la junta militar incumplió nuevamente los plazos para la transición democrática prevista para principios de 2025. La decisión desencadenó protestas que fueron **reprimidas** por el Estado. Algo parecido ocurrió en **Mali**, donde la junta militar que detenta el poder desde 2021 volvió a **posponer** las elecciones, reformó la Constitución para ampliar los poderes presidenciales, **consolidó su capacidad de control** suspendiendo todas las actividades de los partidos políticos y la sociedad civil, y respondió a las críticas internacionales estrechando lazos con Rusia.

En **Chad** también se celebraron elecciones, aunque solo para dar un **arniz de legitimidad** al régimen autoritario. Como era de esperar, Mahamat Idriss Déby, que tomó el poder mediante un golpe militar en 2021, tras la muerte de su padre, se hizo con la victoria en un contexto marcado por una fuerte restricción del espacio cívico y una escasísima oferta electoral. De hecho, su principal rival fue asesinado en circunstancias sospechosas antes de la votación.

En Ruanda, las elecciones también sirven para maquillar el ejercicio autoritario del poder sin que realmente haya espacio para el disenso. A pesar de que el presidente Paul Kagame sigue contando con un gran apoyo nacional, su régimen se ha vuelto cada vez más represivo y las voces críticas enfrentan consecuencias que van desde la criminalización y el acoso hasta el exilio forzoso. Y ni siquiera el exilio les aporta seguridad, ya que los disidentes **corren el riesgo** de ser asesinados u obligados a regresar a Ruanda. Tras la represión sistemática del espacio cívico, las **elecciones generales** de julio se celebraron con una participación mínima de la oposición y estuvieron seguidas de acusaciones generalizadas de fraude.

También en las **Islas Comoras, Mauritania, Mozambique** y otros **países africanos**, los procesos electorales estuvieron salpicados por acusaciones de fraude. En Mozambique, las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia letal las **manifestaciones postelectorales**.

En Asia Central, las elecciones parlamentarias de **Uzbekistán** también fueron una puesta en escena vacía de toda sustancia. En Oriente Medio, las elecciones parlamentarias de **Kuwait**, en abril, y las de **Jordania**, en septiembre, se celebraron en contextos políticos cuidadosamente controlados que mantenían la ilusión de la participación, al tiempo que garantizaban la estabilidad del régimen. En Irán, las dos vueltas de las elecciones parlamentarias y las dos de las presidenciales **pusieron de manifiesto** el férreo control del régimen teocrático sobre la participación política. En las elecciones presidenciales que se celebraron en julio tras la muerte del presidente Raisi, un exministro de Sanidad reformista derrotó a

un antiguo negociador nuclear ultraconservador. Aun así, el poder definitivo sigue en manos del líder supremo, que no es electo.

En el restringido espacio cívico de **Pakistán**, los poderosos militares del país se llevaron una desagradable sorpresa cuando los candidatos afines al ex primer ministro encarcelado Imran Khan obtuvieron el mayor número de escaños en las elecciones. A pesar de que **hicieron cuanto pudieron** para impedir la participación del partido de Khan, muchos votantes aprovecharon la oportunidad para expresar su descontento con el poder militar y por las dificultades económicas. Ante estos resultados, los dos partidos tradicionales unieron sus fuerzas para evitar una situación incómoda para los militares, quienes podrían seguir socavando los procesos democráticos.

Resiliencia democrática y cambio político

En cambio, la resiliencia democrática suele pasar desapercibida: cuando un sistema como debería no sale en los titulares. Pero abundan los ejemplos de instituciones democráticas que han resistido a las presiones y cumplido con su cometido de garantizar las condiciones necesarias para que la ciudadanía haga oír su voz. Y en algunos contextos difíciles, la acción enérgica de la sociedad civil ha preservado y fortalecido la democracia.

En 2024, varios países democráticos celebraron elecciones que provocaron un cambio de gobierno, a menudo como consecuencia del descontento por la inflación, el desempleo, la corrupción y la desigualdad, como sucedió en **Ghana**, **Sri Lanka** y el **Reino Unido**. Sin embargo, los populistas de derecha también han conseguido afianzarse en la política británica.

Botsuana superó una prueba crucial cuando una coalición de la oposición logró desbancar al Partido Democrático de Botsuana,



Celebración frente a Downing Street de la inauguración de un nuevo gobierno laborista tras 14 años de dominio conservador en Londres, Reino Unido, 5 de julio de 2024.

en el poder desde la época de la liberación, después de 58 años al frente del gobierno. El presidente saliente reconoció su derrota y la transición fue pacífica. Del mismo modo, en **Sudáfrica**, el partido Congreso Nacional Africano, en el poder desde la llegada de la democracia, debe ahora compartirlo junto con otros nueve partidos. En **Japón** y la **India**, los partidos en el poder también perdieron apoyos y se vieron obligados a formar coaliciones. Si bien el primer ministro indio Narendra Modi fue presentado como una figura omnipotente y omnipresente mediante una intensa campaña de propaganda, su tímida victoria podría ofrecer a la sociedad civil y a la **minoría musulmana** la oportunidad de revertir los ataques a los derechos humanos y reforzar las libertades democráticas.

La democracia también se impuso en **Taiwán**, donde hay mucho en juego desde el punto de vista geopolítico. El éxito de la votación



Foto de Cem Öziel/Anadolu via Getty Images.

Miles de manifestantes marchan en Dakar, Senegal, reclamando la celebración inmediata de elecciones presidenciales el 17 de febrero de 2024.

demostró que las prácticas democráticas pueden prevalecer, a pesar de las presiones externas y las campañas de desinformación extranjeras. Por el contrario, en **Indonesia**, las elecciones que dieron la victoria Prabowo Subianto, un exgeneral acusado de violaciones de derechos humanos, empujaron al país en una **dirección más autoritaria**, mientras que **Maldivas** y las **Islas Salomón** se acercaron a China, al tiempo que **restringían** las libertades fundamentales.

En otros lugares, la acción de la sociedad civil desempeñó un papel vital para la instauración de la democracia. En **Senegal**, gracias a la movilización de la sociedad civil, se consiguió frustrar el plan del presidente en funciones, que intentó aplazar las elecciones y prorrogar su mandato de forma inconstitucional. Finalmente, la justicia ordenó que se celebraran elecciones presidenciales y un líder de la oposición recién salido de la cárcel se hizo con la victoria. Este

resultado es un buen ejemplo de la determinación de la numerosa juventud senegalesa para hacerse oír.

En **Corea del Sur**, la democracia superó una **dura prueba** cuando el presidente Yoon Suk Yeol reaccionó a las dificultades políticas declarando la ley marcial, alegando que estaba protegiendo al país de las fuerzas norcoreanas y de “elementos antiestatales”. Tras las protestas generalizadas, el Parlamento lo suspendió y lo destituyó al poco tiempo. Era evidente que Yoon no contaba con la determinación de la población surcoreana para defender la democracia usando sus derechos civiles.

En enero se celebraron elecciones en **Bangladesh** que parecieron consolidar el régimen autoritario cuando la primera ministra Sheikh Hasina obtuvo su cuarto mandato consecutivo en medio de una intensa represión de la oposición. Sin embargo, meses después, las manifestaciones masivas lideradas por estudiantes **pusieron fin** a sus 15 años en el poder. Se estableció un **gobierno provisional** presidido por el Premio Nobel de la Paz Mohammed Yunus que incluyó a líderes de las protestas y representantes de la sociedad civil.

En **Guatemala**, Bernardo Arévalo fue investido como presidente, pese a una transición democrática turbulenta y los **repetidos intentos** de las élites aferradas al poder para impedirlo. Arévalo, que llegó a la política de la mano de un partido nacido de las manifestaciones contra la corrupción, ganó las elecciones y consiguió ser investido gracias a la movilización constante de la sociedad civil y la solidaridad democrática internacional.

Tanto **Namibia** como **México** dieron un paso adelante en materia de representación cuando eligieron por primera vez a una mujer como presidenta. Pese a esto, hubo dudas sobre la imparcialidad de las elecciones en Namibia, y en México los comicios se vieron empañados por la **violencia política** y los **intentos de concentración del poder**, suscitando dudas sobre la salud de la democracia a largo plazo.

La sociedad civil y el futuro de la democracia

Varias tendencias son evidentes. Los regímenes autoritarios emplean cada vez más técnicas sofisticadas para manipular las elecciones y distorsionan los marcos constitucionales y legales para conservar el poder bajo un barniz de legitimidad democrática. En 2024, esta situación fue especialmente evidente en Asia Central y varios países africanos donde oficialmente se celebraron elecciones, pero en la práctica no hubo pluralidad.

A menudo, el retroceso democrático se produce por medios aparentemente legales, manteniendo las instituciones y los procesos democráticos, pero vaciándolos de contenido. La desinformación y la manipulación en las redes sociales aceleran esta erosión, creando contextos informativos en los que la población tiene dificultades para distinguir la realidad de la ficción.

Sin embargo, las movilizaciones exitosas en países como Bangladesh, Guatemala y Corea del Sur están demostrando que la sociedad civil es un actor crucial en la defensa de las reglas democráticas y que es posible frenar las trayectorias autoritarias. No obstante, esto podría llevarnos a la conclusión de que es más fácil frenar la regresión cuando se está produciendo, que revertirla una vez que el autoritarismo se ha consolidado.

Asimismo, las OSC **desempeñan roles vitales** en el apoyo a los procesos democráticos. Actúan como guardianas, defensoras y educadoras, supervisando la integridad de las elecciones, combatiendo la desinformación, facilitando la inscripción de votantes y garantizando la participación de grupos excluidos.

Cabe destacar que la labor de la sociedad civil no se limita a las elecciones. Acciones como Implicar a la población en los procesos de gobernanza, exigir responsabilidades al poder y crear coaliciones para conseguir reformas son labores silenciosas y, a menudo, ignoradas que

sostienen la democracia. Por esta razón, las OSC se centran cada vez más en la alfabetización digital y la educación mediática, ayudando a las personas a navegar por entornos informativos complejos y ofreciendo espacios para el diálogo sin importar las diferencias políticas. En las regiones que sufren un retroceso democrático, la sociedad civil suele ser la última línea de defensa del espacio cívico y de apoyo a los grupos excluidos, aunque a menudo ello suponga correr un riesgo considerable.

Para hacer frente al deterioro democrático mundial de manera más eficaz, las iniciativas deben priorizar la protección de las democracias frente al retroceso, y las estrategias deben integrar diversas perspectivas y movilizar amplias coaliciones que trasciendan las divisiones ideológicas. Los discursos a favor de la democracia deben dejar a un lado los conceptos abstractos y explicar claramente cómo la democracia puede mejorar el nivel de vida y la seguridad.

También es necesario investigar los orígenes de la distorsión de la democracia, entre ellos la riqueza de las élites, que desempeña un papel desproporcionado en el poder político, y el aluvión de avances tecnológicos que están exacerbando la desinformación y que requiere una regulación adecuada con garantías sólidas para los derechos humanos.

En una época de colapso de los recursos de la sociedad civil, las fuentes de financiación deben reorientarse para proporcionar un apoyo más flexible y a largo plazo a los movimientos de base que contribuyen a sostener la democracia.

2024 ha demostrado que la democracia enfrenta serios desafíos, pero que tiene una gran capacidad de renovación. La clave de la resiliencia democrática reside en establecer conexiones más sólidas entre las estructuras democráticas formales y el compromiso cívico de las bases. Las iniciativas tendrán que seguir evolucionando en respuesta al avance de los autoritarismos y sus tácticas cada vez más sofisticadas. La acción de la sociedad civil puede marcar la diferencia entre la profundización o la reversión de la recesión democrática.



ECONOMÍA: LA ERA DE LA PRECARIEDAD Y LA DESIGUALDAD



LA DESIGUALDAD ECONÓMICA SIGUE AUMENTANDO DE FORMA DESENFRENADA Y LA LUCHA MUNDIAL CONTRA LA POBREZA SE ESTANCA MIENTRAS LOS MULTIMILLONARIOS SIGUEN AUMENTANDO SU RIQUEZA E INTENTAN CAPTURAR EL ESTADO.



LA EXCLUSIÓN ECONÓMICA ALIMENTA LA INESTABILIDAD POLÍTICA Y LA MOVILIZACIÓN, QUE ES CON FRECUENCIA LIDERADA POR JÓVENES Y REPRIMIDA CON VIOLENCIA POR LAS AUTORIDADES.



LA SOCIEDAD CIVIL ABOGA POR SOLUCIONES TANGIBLES TALES COMO IMPUESTOS A LAS GRANDES FORTUNAS, REFORMAS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y PROGRAMAS DE RENTA BÁSICA UNIVERSAL.

Múltiples factores alimentan la indignación por la situación económica que impulsa procesos políticos tales como el ascenso del populismo y el rechazo a los oficialismos.

En las últimas décadas se redujo en todo el mundo la cantidad de personas que viven en situación de pobreza extrema, en parte gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, pero desde la pandemia de COVID-19 los **progresos se han estancado**. Además de los efectos de la pandemia, las consecuencias de los conflictos y el agravamiento de los efectos del cambio climático también han puesto las economías a prueba. Buen ejemplo de esto fue la invasión masiva de Ucrania por parte de Rusia, que provocó un aumento vertiginoso de los precios de la energía.

Aunque las hostilidades en Ucrania cesaran, la reconfiguración internacional, la impunidad y la imprevisibilidad de Estados Unidos podrían desembocar en nuevos conflictos. Por otro lado, las condiciones meteorológicas extremas —**más probables y frecuentes** debido al cambio climático— están perturbando la agricultura y haciendo **subir los precios** de los alimentos cuando las cosechas son

malas. Así las cosas, es probable que la inflación alimentaria se agrave a medida que se incumplen los objetivos climáticos, y que los precios elevados de los alimentos y la energía se vuelvan permanentes.

Años de ortodoxia económica neoliberal promovida por las élites políticas han a menudo erosionado y encarecido los servicios públicos. La reducción del desempleo en todo el mundo oculta **altas tasas de trabajo informal** e impotencia laboral. Esto sucede especialmente en la floreciente economía bajo demanda, donde los trabajadores de los países de bajos ingresos y los jóvenes de todo el mundo se llevan la peor parte. En todo el mundo, los jóvenes acaban los estudios universitarios, pero tienen pocas perspectivas y es probable que tengan que luchar durante años para salir adelante. Por si fuera poco, el aumento de la automatización gracias al uso creciente de la IA podría reducir aún más las oportunidades laborales. Además, la escalada de los precios está provocando una crisis inmobiliaria debido a una fuerte **escasez de viviendas accesibles**. En muchos países, es posible que los jóvenes nunca puedan ser propietarios y que tengan que destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler.

Todo esto se suma a una era marcada por la precariedad económica. En todo el mundo, muchas personas se ven obligadas a utilizar todos sus recursos para llegar a fin de mes y las cosas no han hecho más que complicarse en los últimos años. El encarecimiento de los alimentos y los combustibles hace que el dinero alcance para menos, reduciendo la calidad de vida de las personas. Shocks económicos pequeños pueden tener grandes repercusiones. Incluso cuando los indicadores económicos señalan que todo va bien, como en Estados Unidos, cuando la gente hace la compra muchas veces percibe otra cosa; de hecho, esta fue una de las razones de la victoria de Trump.

Indignación por motivos económicos

Las protestas callejeras son una respuesta recurrente a la intensificación de la presión económica. El año 2024 confirmó que tanto el alza de los productos básicos como la imposición de nuevos impuestos a personas en situaciones difíciles suscitan manifestaciones de forma sistemática. Además, los movimientos de protesta a menudo no se limitan a los motivos que los impulsaron y también reclaman la redistribución del poder político y económico.

En varios países africanos, ese año hubo una **oleada de protestas** lideradas por manifestantes de la Generación Z. Comenzó en **Kenia**, desencadenada por un programa para aumentar numerosos impuestos. Rápidamente las autoridades dieron marcha atrás, pero las protestas continuaron. A continuación, el fenómeno se propagó a países como **Ghana** y **Nigeria** y **Uganda**, todos ellos con una ingente población juvenil que padece dificultades económicas y carece de oportunidades.

Debido a que las protestas por el costo de la vida suelen acabar formulando demandas más amplias sobre el reparto del poder económico y político, los Estados a menudo las reprimen con violencia. En Kenia surgió una tendencia inquietante: a la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes se le sumaron los **secuestros** de jóvenes activistas por personas armadas vestidas de civil, sospechosas de ser agentes del Estado. En otros países, las autoridades también han respondido con mano dura, como en Nigeria, donde las fuerzas de seguridad recurrieron a la violencia letal.

La indignación por motivos económicos también provocó protestas en otros lugares. En mayo, en la región de Cachemira controlada por Pakistán, el encarecimiento de los alimentos, los combustibles y los servicios públicos **desencadenó manifestaciones** que pronto derivaron en violencia. En Bolivia, miles de partidarios del expresidente Evo Morales **marcharon** por las calles de La Paz, la capital, en enero de 2025, en medio de una **crisis provocada por**

la inflación y la escasez de divisas y de combustible. El país está polarizado y es probable que las protestas se repitan de cara a las elecciones de 2025. En el Caribe, en las islas francesas de Guadalupe y Martinica, también se vivieron protestas en 2024, **algunas de ellas violentas**, motivadas por la subida del precio de los alimentos a las que se sumó la indignación contra el **colonialismo**. No cabe duda de que los costos elevados y las subidas de impuestos provocarán nuevas manifestaciones en 2025 y que es probable que los países con un espacio cívico limitado las repriman con violencia.

En este contexto, es frecuente que las instituciones mundiales agraven los problemas. A menudo las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para conceder préstamos suscitan la indignación popular. Por ejemplo, en Kenia, las subidas de impuestos que desataron las protestas formaban parte de un paquete de medidas impuesto por el FMI que también incluía recortes del gasto público y políticas de privatización. En Nigeria, el presidente Bola Tinubu siguió las recomendaciones del Banco Mundial y, en su primer día en el cargo, puso fin a las subvenciones a los combustibles y posteriormente devaluó la moneda, encareciendo los productos importados y creando las condiciones para las protestas.

Desigualdad económica y captura del Estado

Pero la situación no es la misma para todos. La brecha entre los superricos y el resto de la población sigue aumentando. En 2024, los **2.769 milmillonarios** de todo mundo aumentaron su riqueza en dos billones de dólares, el equivalente a unos 5.700 millones de dólares al día. En la última década, el 1% más rico del mundo ha incrementado su patrimonio en **42 billones de dólares**. Cinco años después del inicio de la pandemia, la tendencia que ya se había detectado no ha hecho más que agravarse: los ultrarricos **se enriquecen** mientras que todos los demás pasan apuros. Estas personas perpetuarán su poder transmitiendo



Elon Musk habla durante el desfile inaugural de Donald Trump en Washington D. C., Estados Unidos, 20 de enero de 2025.

grandes fortunas a sus herederos; de hecho, en la actualidad, el **36%** de la riqueza de los multimillonarios ya procede de herencias.

Además, esta clase superrica se está implicando en la política como nunca antes. Las élites ultrarricas siempre han aprovechado su influencia en beneficio propio para condicionar la política fiscal, la regulación empresarial y los derechos laborales. De hecho, durante mucho, la existencia de una oligarquía poderosa ha sido una característica de los Estados menos democráticos. Es por ello, que el hecho de que Trump haya formado un gabinete con un número sin precedentes de multimillonarios hace temer que Estados Unidos también se esté convirtiendo en una oligarquía. Como consecuencia, las políticas estadounidenses que tienen implicaciones globales serán diseñadas por personas que no tienen ni idea de lo que se siente al ser pobre y vulnerable, pero que sí que saben cómo proteger y aumentar su riqueza. Por estas razones, la oligarquía, dondequiera



Protesta contra las dificultades económicas, el hambre y la inseguridad durante la celebración del Día de la Independencia en Lagos, Nigeria, 1 de octubre de 2024.

que exista, erosiona la democracia y los derechos humanos.

Las numerosas empresas que han modificado sus políticas para adaptarse al gobierno de Donald Trump, incluso **abandonando** las iniciativas federales para la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) después de que él pusiera fin a esos programas, demuestran que el sector privado está dispuesto a transigir cuando la rentabilidad está en juego. Del mismo modo, durante las elecciones cruciales que se celebraron en Francia, los líderes empresariales **expresaron** abiertamente su preferencia por la Agrupación Nacional antes que por la coalición de izquierda. En la India, los industriales multimillonarios Gautam Adani y Mukesh Ambani han ampliado espectacularmente sus imperios empresariales y consolidado un control sin precedentes sobre sectores económicos estratégicos bajo el mandato de Narendra Modi, con quien tienen vínculos estrechos. Como se puede ver, el fascismo y las grandes empresas pueden coexistir sin problemas.

La desigualdad también se reproduce en el seno de las principales instituciones internacionales. El FMI y el Banco Mundial siguen dominados por los intereses del norte global, con estructuras de gobierno que no han cambiado desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial. El neoliberalismo económico que imponen a los países del sur global es un reflejo de ello, ya que grava de forma desproporcionada a los más vulnerables y profundiza las desigualdades económicas. Por esta razón, las propuestas de la sociedad civil para reformar estas instituciones deben considerarse seriamente.

Necesidad de cambio

Las cosas tienen que cambiar. Gracias a largos años de investigación, análisis e incidencia de la sociedad civil hoy tenemos varias ideas para lograrlo, entre ellas, propuestas para reformar las instituciones financieras internacionales e implementar una renta básica universal. Mientras tanto, la idea de una la semana laboral de cuatro días,

promovida por la sociedad civil para restablecer un equilibrio sano entre la vida laboral y personal, sigue ganando adeptos. Para enero de 2025, **200 empresas** del Reino Unido habían adoptado de forma permanente la semana laboral de cuatro días, beneficiando a unos 5.000 empleados. Los datos que se obtuvieron confirmaron que no hubo una bajada de la productividad. También se está observando que los trabajadores más jóvenes exigen cada vez más derechos laborales, así como semanas de trabajo más cortas y mayor flexibilidad para trabajar a distancia, cuando las condiciones del mercado laboral se lo permiten.

Pero es difícil lograr avances sin enfrentarse a la creciente y abismal brecha entre los ultrarricos y el resto de la población. Si la economía mundial beneficia únicamente a una pequeña minoría, es de justicia aplicar medidas de redistribución de recursos.

Hay que tomarse en serio las propuestas de impuestos sobre el patrimonio y sobre las ganancias extraordinarias, como las de las empresas energéticas que, sin buscarlos, obtuvieron **beneficios récord** como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Los impuestos sobre el patrimonio por sí solos podrían generar más de **2,1 billones de dólares al año**, mientras que los impuestos sobre sucesiones podrían contribuir a atajar la perpetuación del poder económico de las élites y de las desigualdades que persisten durante

generaciones. El G20, el club de las principales economías del mundo, no es un foro al que la sociedad civil suele acudir en busca de medidas progresistas; pese a esto, logró algunos avances durante la cumbre celebrada en Brasil, en 2024, cuando los líderes **acordaron** que era necesario aplicar impuestos a las grandes fortunas.

Por otra parte, los déficits fiscales también suponen un enorme problema a nivel mundial: cada año se pierden **492.000 millones de dólares** debido a las lagunas jurídicas que ofrecen los paraísos fiscales y que aprovechan empresas y particulares. A esto se suma el hecho de que las ventajas fiscales suelen aumentar en los países dominados por oligarcas. Afortunadamente, ahora que el G20 ha empezado a reconocer el problema, es el momento oportuno para impulsar las reformas. Además, la ONU está desarrollando actualmente un prometedor **tratado fiscal mundial** que debería acordarse para 2027 y que permitiría reforzar la cooperación internacional para recuperar los impuestos que escapan a las arcas públicas.

La consecución de un tratado sólido y la introducción de impuestos a la riqueza deben ser los **objetivos prioritarios** de incidencia de la sociedad civil en 2025, comenzando por la inminente **Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo**, y en los años venideros. Los recursos que se recuperen deberían usarse para construir un mundo más justo y equitativo.



CLIMA Y MEDIO AMBIENTE: EL RUMBO EQUIVOCADO



LA FALTA DE FONDOS SUFICIENTES IMPIDE QUE SE MATERIALICEN LOS COMPROMISOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES.



LA SOCIEDAD CIVIL ESTÁ CONSIGUIENDO VICTORIAS EN MATERIA CLIMÁTICA Y AMBIENTAL A TRAVÉS DE DIVERSAS ESTRATEGIAS, ENTRE LAS QUE SE DESTACA EL LITIGIO ESTRATÉGICO QUE ESTABLECE PRECEDENTES LEGALES PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA.



EN TODO EL MUNDO, QUIENES DEFIENDEN EL MEDIO AMBIENTE ENFRENTAN PELIGROS CRECIENTES, QUE VAN DESDE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA PACÍFICA HASTA LA DETENCIÓN ARBITRARIA Y LA VIOLENCIA.

El mundo arde mientras los ricos se enriquecen y los beneficios de los combustibles fósiles se disparan. Además de las ganancias extraordinarias de las empresas de combustibles fósiles por la invasión rusa, en las últimas cinco décadas, el sector petrolero y gasístico ha obtenido una media de **2.800 millones de dólares de beneficios al día**. Sin embargo, en la actualidad las empresas están reduciendo sus inversiones en energías renovables y planificando nuevos proyectos extractivos, al tiempo que utilizan sus abultadas cuentas bancarias para presionar en contra de las medidas que podrían frenar sus actividades.

El 2024 fue el año más caluroso jamás registrado, en gran parte como consecuencia del modelo económico impulsado por los combustibles fósiles. También fue el primero en el que las temperaturas superaron los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, el límite fijado en el Acuerdo de París de 2015 para evitar las peores consecuencias del cambio climático. El año estuvo plagado de olas de calor, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos, y, actualmente, ya a sea por la **inflación provocada por el cambio climático** o por el aumento de las **migraciones**, las repercusiones se están haciendo sentir en el día a día.

Aun así, los esfuerzos son muy escasos. Las empresas de combustibles fósiles continúan con su negocio mortífero, mientras que los gobiernos de los países del norte global, que históricamente han sido los mayores emisores de gases de efecto invernadero, están descafeinando los programas climáticos a medida que ganan influencia los políticos de derecha, que suelen oponerse a la lucha contra el cambio climático. Además, no están aportando los fondos suficientes para ayudar a los países del sur a adaptarse. Asimismo, la ambición teórica de compromisos internacionales como el Acuerdo de París y el Convenio sobre la Diversidad Biológica contrasta con su escaso impacto en cumbres como la COP29 y la lentitud en el progreso de otros tratados, como el de plásticos.

La sociedad civil está haciendo todo lo que puede para que se tomen medidas que estén a la altura de la crisis climática y ambiental, y lo está logrando gracias a una combinación de tácticas que incluyen movilización, incidencia y litigio. Pero en muchos países experimenta ataques, particularmente la criminalización de manifestantes pacíficos y actos de violencia contra el activismo.

Las grandes cumbres, una decepción

El 2024 fue un año decepcionante para los procesos internacionales que en teoría deben preservar el clima y la biodiversidad. En diciembre se celebró la **COP29**, la última cumbre sobre el clima y la primera centrada en la financiación. Por una cuestión práctica y de justicia, los países del sur global quieren que las economías más poderosas, las más beneficiadas por las industrias causantes de la mayor parte del cambio climático, ayuden a financiar la adaptación a los impactos climáticos y los costos de una transición hacia economías bajas en emisiones de carbono, como alternativa a la búsqueda de un desarrollo impulsado por los combustibles fósiles. Se calcula que hacen falta 1,3 billones de dólares al año, sin embargo, los países del norte global únicamente acordaron 3.000 millones de



Jóvenes activistas protestan durante la cumbre sobre el cambio climático COP29 en Bakú, Azerbaiyán, 22 de noviembre de 2024.

dólares anuales. Estos recursos serán insuficientes para frenar el aumento de las temperaturas y harán que los países que menos han contribuido al cambio climático sean los más vulnerables.

Por segundo año consecutivo, la cumbre se celebró en un Estado petrolero, Azerbaiyán, y por tercer año consecutivo en un país con un **espacio cívico cerrado**. Antes del encuentro, el gobierno **intensificó su represión sistemática de la sociedad civil**, y, ya durante la reunión, se comportó como si se tratará de un acto de relaciones públicas, no mostró un liderazgo firme y permitió que primaran los intereses de los Estados poderosos. Todo esto desembocó en propuestas de financiación insuficientes, y gracias a petroestados represivos como Arabia Saudita tampoco se avanzó en la eliminación gradual de los combustibles fósiles. De todas maneras, con las voces de la sociedad civil silenciadas y la presencia de **al menos 1.773** grupos de presión del sector de los combustibles fósiles, el fracaso estaba prácticamente asegurado.

De igual manera, la **COP16** sobre el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Colombia en octubre, también se centró en la financiación y tampoco estuvo a la altura de las esperanzas de la sociedad civil. Se esperaba alcanzar un acuerdo para financiar el **Marco Global de Biodiversidad**, acordado en 2022, para que el 30% de la superficie terrestre y marina sean áreas protegidas en 2030, un objetivo histórico. Desafortunadamente, no hubo acuerdo. Los países del norte global se negaron a crear un nuevo fondo para financiar los 30.000 millones de dólares que se necesitan y la cuestión quedó aplazada hasta próximas reuniones previstas para este año. Mientras tanto, más de la mitad de los países aún **no han diseñado planes** para cumplir con los objetivos del Marco de Global de Biodiversidad.

Pese a todo esto, la COP16 logró algunos avances en otros frentes. Se llegó a un acuerdo sobre la utilización de los datos genéticos, muchos de los cuales proceden de países del sur global y son cada vez más usados por empresas. El convenio establece que, cuando utilicen estos datos, las empresas deberán contribuir a un nuevo fondo; sin embargo, la adhesión al acuerdo es voluntaria.

La COP16 también abrió nuevos caminos con la **creación de un organismo** que representará a los pueblos indígenas y las comunidades locales en las negociaciones, una innovación que otros procesos internacionales deberían imitar. Este nuevo órgano podría ayudar a contrarrestar la influencia de los grupos de presión empresariales, cuya presencia en la COP16 fue numerosa: **1.261** representantes del sector privado, muchos de ellos de empresas de combustibles fósiles, asistieron a la cumbre con el fin de influir en sus procedimientos.

Asimismo, las negociaciones para elaborar un tratado jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos también ha sido una experiencia frustrante para la sociedad civil. La **quinta ronda de negociaciones** se celebró en Busan, Corea del Sur, pero concluyó en diciembre sin que se llegara a ningún acuerdo, pese a que se había previsto que el tratado estaría listo para entonces.

Existe una clara división entre los Estados que abogan por un tratado ambicioso y aquellos que buscan limitar su alcance, a menudo las economías dependientes del gas y del petróleo. La sociedad civil y los Estados que quieren un pacto estricto reconocen los efectos devastadores de la contaminación por plásticos y la necesidad de reducir su producción; y los que quieren uno laxo se centran únicamente en la gestión de residuos, a pesar de la limitada eficacia del reciclaje.

A pesar de que la industria del petróleo y el gas lucha con uñas y dientes contra la acción climática, ve en los plásticos su último recurso, ya que se fabrican con productos químicos derivados de combustibles fósiles. Una vez más, el sector contó con una fuerte presencia, con la cifra récord de 220 representantes de la industria petroquímica inscritos, varios de ellos como miembros de delegaciones estatales.

En este contexto, la sociedad civil funciona como un contrapeso vital a las voces de la industria y ha mantenido una presencia constante, combinando investigación científica, campañas de sensibilización, acción directa e incidencia estratégica en las políticas públicas. La sociedad civil considera que se ha evitado un acuerdo precipitado e insuficiente, y la presión para lograr un tratado ambicioso **continuará**.

Acción de la sociedad civil

Más allá de las cumbres internacionales, la sociedad civil sigue trabajando en todos los frentes. En abril, obtuvo una **victoria histórica** en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sentó un precedente para 46 Estados europeos. KlimaSeniorinnen Schweiz **ganó la querrela** que había iniciado contra el gobierno suizo, al que acusó de vulnerar su derecho a la intimidad y la vida familiar por no esforzarse lo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.



Activistas protestan contra el proyecto del Oleoducto de Petróleo Crudo de África Oriental en Kampala, Uganda, 26 de agosto de 2024.

Foto de Badru Katumba/AFP via Getty Images.

La sociedad civil también defiende la biodiversidad y lucha contra la degradación del medio ambiente desde los tribunales. En abril, la sociedad civil **ganó un juicio** en Italia contra la contaminación del agua potable causada por la producción intensiva de avellanas. Este logro supuso la tercera victoria en una serie de batallas judiciales.

Los recientes litigios iniciados en Italia estuvieron liderados por la organización ClientEarth, que también ha **iniciado una causa** contra una nueva planta de plásticos de grandes dimensiones en Bélgica. Otras 15 organizaciones colaboran con ella para impedir que el gigante químico INEOS construya una planta en Amberes. Gracias a esta acción legal, INEOS se ha visto obligado a reducir sus planes.

Históricamente, la mayoría de los litigios para proteger el medio ambiente y luchas contra el cambio climático se han desarrollado en los países del norte global. No obstante, la sociedad civil del

sur global también está optando por esta vía y ya ha presentado demandas en **55 países**. Por ejemplo, en agosto, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur **dictaminó** que la falta de objetivos para la reducción de emisiones viola los derechos constitucionales de la juventud y ordenó al gobierno que modificara la legislación. En abril, el Tribunal Supremo de la India **determinó** que el derecho a no sufrir los efectos nocivos del cambio climático es un derecho fundamental. En julio, un tribunal de Ecuador emitió otra sentencia pionera cuando, basándose en el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, **reconoció los derechos** del río Machángara y ordenó a las autoridades que lo limpiaran.

La labor de incidencia también está logrando resultados significativos. En octubre, activistas contra el cambio climático de la RDC **consiguieron** que se suspendiera una polémica subasta de licencias petroleras y gasísticas que amenazaba dos depósitos de carbono vitales. Actualmente están presionando para que se cancele definitivamente este tipo de subastas.

El activismo se está centrando en las instituciones que mediante patrocinios y asociaciones prestan su credibilidad e imagen pública positiva a empresas que contribuyen al deterioro del medio ambiente y al agravamiento del cambio climático. En julio, tras una **campaña de ocho años**, el Museo de la Ciencia del Reino Unido **decidió poner fin** a su acuerdo con el gigante petrolero estatal noruego Equinor. Gracias a los esfuerzos de la sociedad civil, casi todas las instituciones culturales más importantes del Reino Unido han dejado de aceptar el patrocinio de empresas del sector de los combustibles fósiles.

El espacio cívico bajo asedio

La protesta sigue siendo fundamental para mantener la presión para conseguir acción contra el cambio climático. Sin embargo, en muchos



Foto de Orlando Sierra/AFP/vía Getty Images.

Funeral del líder ecologista Juan López, asesinado a tiros por su activismo contra la minería, en Tocoa, Honduras, 16 de septiembre de 2024.

países las autoridades están criminalizando acciones que solían ser consideradas formas legítimas de protesta. En un **contexto mundial** marcado por las restricciones del espacio cívico, el activismo contra el cambio climático y las personas defensoras de derechos ambientales, territoriales y de los pueblos indígenas se encuentran **entre los grupos más perseguidos**.

Quienes trabajan por los derechos ambientales, los derechos de los pueblos indígenas y la defensa del territorio están expuestos a la violencia y corren incluso el riesgo de perder la vida. Según Global Witness, **196 personas** fueron asesinadas en 2023 por defender estos derechos. Con 79 homicidios, **Colombia** se posicionó como el país más peligroso; casi la mitad de las víctimas eran activistas indígenas. A menudo, los Estados y las empresas consideran a los pueblos indígenas como un obstáculo para sus actividades extractivas y no es raro que grupos delictivos vinculados a intereses empresariales estén

implicados en casos de violencia y homicidios. De hecho, de las más de 2.000 personas defensoras del medio ambiente y del derecho a la tierra asesinadas desde 2012, **alrededor de un tercio** eran indígenas. Al igual que en Colombia, las amenazas también son elevadas en países como **Brasil, Ecuador, Honduras, México, Paraguay y Perú**.

La violencia por parte de las fuerzas de seguridad y las detenciones y encarcelamientos masivos, especialmente de manifestantes, también se están normalizando. En los Países Bajos, las autoridades **detuvieron** a miles de personas por participar en protestas multitudinarias en carreteras para exigir al gobierno que cumpliera con su promesa y pusiera fin a las subvenciones a los combustibles fósiles. En Francia, en junio de 2024, la policía **empleó la violencia** y granadas aturdidoras durante una manifestación contra la construcción de una autopista, y en agosto prohibió otra protesta. Ese mismo año, en Australia, las autoridades detuvieron a activistas que se oponían a la construcción de una enorme **planta de carbón** y a un **proyecto gasístico**.

En Uganda, los activistas que se oponen al ambicioso oleoducto de África Oriental siguen sufriendo la represión del Estado. En mayo y junio, 11 activistas que participaban en una campaña contra el proyecto fueron **detenidos arbitrariamente** por las autoridades y han sido sometidos a presiones y actos de intimidación para que abandonen su activismo.

En Camboya, los activistas del grupo Madre Naturaleza han pagado un **alto precio** por su oposición a los poderosos intereses políticos y económicos que buscan explotar el medio ambiente. En julio, diez jóvenes activistas del grupo que habían documentado la contaminación de varios ríos fueron condenados a **largas penas de cárcel**.

En Serbia, el gobierno, cada vez más autoritario, reprimió las **protestas** contra la explotación de yacimientos de litio, un material usado en las baterías de los vehículos eléctricos, pero cuya extracción es muy contaminante. En 2022, la sociedad civil cosechó una victoria

cuando consiguió detener la concesión de licencias; sin embargo, la decisión fue **anulada** en 2024. El presidente **difamó** a los manifestantes que se oponían a la reanudación de la minería, y las autoridades los **encarcelaron** por bloquear vías de tren.

Recientemente, países como el Reino Unido han modificado las leyes sobre las manifestaciones con el fin de ampliar el abanico de delitos, agravar las penas y reforzar los poderes de la policía. En julio, cinco activistas de Just Stop Oil fueron **condenados** a penas extremadamente largas, de hasta cinco años, simplemente por planificar el bloqueo de una autopista. Actualmente, el número de manifestantes ecologistas que son detenidos en suelo británico es **tres veces superior** a la media mundial.

El **gobierno de derecha** de Italia está estableciendo **nuevas restricciones**. En enero, el Parlamento aprobó una ley sobre los llamados “ecovándalos”, en respuesta a los actos de sensibilización con gran repercusión mediática que se llevaron a cabo en monumentos y espacios culturales. La nueva normativa prevé penas de hasta cinco años de prisión y actualmente se está preparando otra ley represiva que establece penas de hasta dos años por el bloqueo de carreteras.

La lucha continúa

Incluso en condiciones adversas se pueden cambiar las cosas. No tenemos que olvidar que, para los millones de personas expuestas a las consecuencias del cambio climático, cada décima de grado cuenta. En este ámbito, en el 2024 se consiguieron varios logros importantes. En septiembre, por ejemplo, el Reino Unido cerró su última central eléctrica de carbón; solo una década antes, alrededor del 30% de la electricidad que consumía el país procedía del carbón. Este caso demostró el potencial de la **incidencia persistente** de la sociedad civil.

En la UE se produjo un gran avance en julio con la adopción de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La nueva norma obliga a las grandes empresas a alinearse con el Acuerdo de París con el objetivo de combatir el cambio climático y, al mismo tiempo, proteger los derechos humanos y el medio ambiente. Dentro de este nuevo marco, los tribunales europeos tendrán nuevas competencias para exigir responsabilidades a las empresas y podrán imponerles multas cuantiosas en caso de infracción. Además, en algunos casos, los grupos de la sociedad civil podrán demandar a las empresas.

Frente a la oposición de los partidos de derecha, la sociedad civil desempeñó un **papel importante** en la campaña a favor de la directiva, colaborando con la Presidencia de la UE y los Estados que apoyaban la medida y acercándose a las grandes empresas para animarlas a participar. Pese a todo esto, al final la directiva se aplicará a un número menor de empresas de lo previsto, ya que hubo que hacer algunas concesiones para sacar el texto adelante. Y ahora, el giro a la derecha y la pérdida de escaños de los partidos ecologistas en el Parlamento Europeo podrían ralentizar los avances. Por ello, corresponde a la sociedad civil mantener la presión y vigilar que las empresas cumplan la ley.

En mayo, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar marcó un nuevo hito con su primera **sentencia** relacionada con el clima. El órgano judicial determinó que los gases de efecto invernadero absorbidos por los océanos constituyen una forma de contaminación marina. Por consiguiente, los Estados tendrán que actuar para controlar y reducir sus emisiones. El dictamen del Tribunal sienta un importante precedente porque establece que las obligaciones de los Estados no se limitan al Acuerdo de París.

La sentencia podría servir de base para otros procesos internacionales que pretendan elevar el listón para los Estados. En diciembre, la CIJ **comenzó la vista de un caso** presentado por un grupo de Estados insulares del Pacífico que solicitan un dictamen

consultivo sobre cómo deben actuar los Estados para combatir el cambio climático y asistir a los países que sufren sus peores consecuencias. La idea de acudir a los tribunales vino de la sociedad civil en 2019, cuando grupos de estudiantes de ocho países **crearon** la red Estudiantes de las Islas del Pacífico contra el Cambio Climático para instar a sus líderes nacionales a llevar el asunto ante la CIJ. El tribunal ya ha escuchado los argumentos de más de un centenar de Estados y organizaciones. Una sentencia positiva podría sentar las bases para una norma ambiciosa que permitiría a la sociedad civil exigir responsabilidades a los Estados.

También se están tomando medidas similares a nivel regional. En 2023, Chile y Colombia solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un dictamen consultivo sobre sus deberes y obligaciones en cuanto a la protección de los derechos humanos en el contexto de la crisis climática. El **elevado interés** que suscitó la iniciativa quedó patente en las audiencias públicas de 2024, en las que más de 220 **grupos de la sociedad civil** presentaron sus alegatos. Está previsto que el tribunal emita su dictamen en 2025.

De cara al futuro

El regreso de Trump deja entrever un camino sembrado de obstáculos. El mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero de la historia y principal extractor de combustibles fósiles de la actualidad ha anunciado que volverá a retirarse del Acuerdo de París, ha **hecho trizas** las políticas de energías renovables y ha facilitado las labores de prospección en busca de más combustibles fósiles. Frente a estas decisiones, otras naciones industrializadas deben liderar la respuesta contra el cambio climático y, en Estados Unidos, los gobiernos de los estados más progresistas deben hacer todo lo posible para reducir las emisiones.

Aun así, hará falta un cambio radical en materia de financiación. Si ya es difícil alcanzar acuerdos internacionales sobre el clima y el medio ambiente, financiarlos lo es todavía más. Por eso hay que ser ambiciosos en 2025. Las cifras pueden parecer descomunales, pero en términos globales son ínfimas. Los 1,3 billones de dólares necesarios para combatir el cambio climático representan menos del 1% del PIB mundial y un porcentaje mucho menor que el del gasto militar. Esta cantidad también es mucho menor que lo que costará hacer frente a los daños causados por un cambio climático descontrolado.

Para promover compromisos más ambiciosos y garantizar su seguimiento, también es necesario reformar el funcionamiento de las cumbres, de modo que los Estados que realmente estén comprometidos con la lucha contra el cambio climático sean los que las acojan y lideren, que la sociedad civil pueda participar plenamente y que los grupos de presión de los combustibles fósiles queden excluidos. La sociedad civil seguirá presionando para que se introduzcan mejoras en la COP30 que se celebrará en Brasil el próximo noviembre.

Antes de la cumbre, los Estados deben presentar nuevos planes diseñados a nivel nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. Puede que sea la última oportunidad para lograr que las temperaturas aumenten menos de 1,5 grados. La sociedad civil está presionando para que estos planes muestren la ambición necesaria y para que se movilicen fondos suficientes.

Sin la presión de la sociedad civil, no habrá avances. Los Estados y las empresas deben cesar sus ataques contra activistas y organizaciones ambientalistas y de lucha contra el cambio climático. Deben dejar que la sociedad civil desempeñe su rol crucial en la respuesta a la crisis.



TECNOLOGÍA: LOS PELIGROS HUMANOS DEL PODER DIGITAL



LOS MULTIMILLONARIOS DEL SECTOR TECNOLÓGICO SE ALINEAN CADA VEZ MÁS CON LAS POLÍTICAS DE DERECHA Y EL AUTORITARISMO, Y ABANDONAN SU COMPROMISO SOCIAL EN FAVOR DE LA GANANCIA Y EL PODER.



LA IA SUSCITA CADA VEZ MÁS INQUIETUD, ENTRE OTRAS RAZONES, POR SUS IMPACTOS CLIMÁTICOS Y AMBIENTALES, SU USO PARA VIGILANCIA Y SUS RESULTADOS SESGADOS, PESE A LO CUAL LAS GRANDES POTENCIAS SE RESISTEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALVAGUARDIAS INTERNACIONALES.



LA SOCIEDAD CIVIL ENFRENTA OBSTÁCULOS PARA OBLIGAR A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS A RENDIR CUENTAS, YA QUE LAS REDES SOCIALES PRIORIZAN LA INTERACCIÓN POR ENCIMA DE LA VERACIDAD; SIN EMBARGO, PRESIONAR A LOS ANUNCIANTES Y TOMAR ACCIONES LEGALES PODRÍA AYUDAR A SORTEARLOS.

Preocupación por la IA

Cada vez hay más conciencia de los impactos de la IA sobre el clima y el medio ambiente. Los enormes centros de datos necesarios para hacerla funcionar consumen grandes cantidades de electricidad y agua, y a medida que su uso se expande, también lo hacen los problemas. Una sola pregunta a una herramienta de IA puede consumir **diez veces más energía** que una búsqueda tradicional en internet. Como consecuencia, el crecimiento de la IA está impulsando un **auge** de construcción de centrales eléctricas alimentadas a gas, a pesar de que estas deberían eliminarse progresivamente para cumplir los objetivos climáticos. Cabe citar el caso de Google, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero **se dispararon un 48%** entre 2019 y 2023 debido a la expansión de sus centros de datos, dejando atrás su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030.

La más reciente innovación, DeepSeek, podría aliviar algunas de estas preocupaciones, ya que parece no necesitar centros de datos de las mismas dimensiones. Aun así, subsisten otros interrogantes sobre este proyecto chino que causó revuelo en enero de 2025, cuando



Foto de John Moore/Getty Images.

Agentes de la Patrulla Fronteriza capturan datos biométricos con fines de seguimiento en un centro de procesamiento de migrantes en Arizona, Estados Unidos, 7 de diciembre de 2023.

se convirtió súbitamente en la aplicación más descargada en más de 150 países. Por ejemplo, si se le pregunta a DeepSeek por Hong Kong, Taiwán o la masacre de Tiananmen, **no responderá** o mostrará propaganda estatal china. Esta herramienta no alivia en nada los temores de que la IA sea utilizada para manipular a la ciudadanía mediante la difusión de relatos basados en falsedades.

Como se vio en muchas de las elecciones de 2024, el poder de la desinformación se ha exacerbado con los avances en IA generativa, una tecnología capaz de producir texto, imágenes y videos a partir de instrucciones del usuario. Los resultados de estas herramientas reflejan los prejuicios de sus creadores y los sesgos de los datos acumulados, y facilitan la tarea de crear de fotos y videos falsos que resultan convincentes. Incluso cuando no se le pide que manipule una información, la IA generativa tiende a inventar respuestas que son verosímiles pero incorrectas. Según un estudio reciente, **alrededor de una quinta parte** de las respuestas de las IA que citan a la BBC contienen errores factuales.

Si bien tanto la IA generativa como una futura inteligencia artificial general, capaz de igualar o de superar las capacidades de aprendizaje y comprensión humanas, podrían aportar beneficios, también plantean toda una serie de preocupaciones. Expresar públicamente estos temores podría parecer alarmista; sin embargo, en diciembre de 2024 el científico y premio Nobel Geoffrey Hinton, el “padrino” de la IA, lanzó una **advertencia** escalofriante: hay entre 10% y 20% de probabilidades de que la IA acabe con la humanidad en cuestión de décadas.

Los modelos de IA que se usan actualmente han suscitado preocupación por sus impactos sobre el empleo y los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como, puesto que son entrenados con material generado por humanos, por arrojar resultados sesgados que reproducen la exclusión.

La IA también es cada vez más utilizada en tecnologías de vigilancia basadas en el reconocimiento facial, emocional y biométrico. Aquí

se plantean problemas de sesgos, extralimitación y desvío de sus funciones. Herramientas inicialmente destinadas a la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, pueden ser fácilmente utilizadas para socavar las libertades simplemente porque están disponibles. El auge del uso militar de la IA también es alarmante. En febrero de 2025, Alphabet, **abandonó** su promesa de no utilizar la IA para el desarrollo de armas o herramientas de vigilancia, dejando atrás el antiguo lema de Google, “no seas malvado”.

El ritmo de evolución de la IA claramente supera el ritmo de la regulación. Prueba de ello fue la Cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial celebrada en París en febrero de 2025. Si bien unos 60 estados respaldaron una declaración a favor de una IA sostenible, abierta, transparente, ética y segura, el Reino Unido y Estados Unidos **se negaron a firmarla**. Este último expresó su preocupación por una posible “regulación excesiva”. Además, uno de los primeros actos de Trump fue **revocar** un decreto que establecía salvaguardias para la IA. Este panorama evidencia el creciente peligro de un vacío normativo.

El uso de programas espía también preocupa y afecta a la sociedad civil. Numerosos Estados han utilizado el programa espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, para espiar a la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación. El Ejecutivo jordano ha sido el **último en sumarse a la lista** de gobiernos que se sirven de esta herramienta, tras usarla para espiar a al menos 35 personas en el marco de una ofensiva constante contra el espacio cívico.

Urge prohibir este programa espía (solo disponible para los Estados) y establecer una moratoria mundial sobre el desarrollo y la venta de tecnologías de vigilancia digital hasta que se establezcan garantías sólidas para los derechos humanos.

Alineamiento de los líderes tecnológicos con Trump

Las acciones de los líderes tecnológicos demuestran que no se puede confiar en ellos (ojalá no fuera así). En su día, los magnates de Silicon Valley trataron de aparentar que tenían conciencia social, pero cada vez se les hace más difícil mantener su pantomima.

La rapidez con la que **se alinearon** con el gobierno de Donald Trump, **donando millones de dólares** al fondo para su investidura, es una señal preocupante. Amazon, Google, Meta, Microsoft y Uber donaron un millón de dólares cada una, y los presidentes ejecutivos de tecnológicas como Tim Cook, de Apple, y Sam Altman, de OpenAI, también contribuyeron.

Estas donaciones cuantiosas e inusuales revelan, como mínimo, la firme decisión de mantenerse del lado de un presidente conflictivo. Podrían ser también un indicio de su interés por limitar una posible regulación de la inteligencia artificial y las criptomonedas, así como por obtener una mayor parte del gasto en defensa.

Pero para Meta, propietaria de Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp, la donación fue solo una forma más de acercarse a Trump. En enero de 2025, la empresa **anunció** el fin de su programa independiente de verificación de datos en Estados Unidos. Mark Zuckerberg afirmó que la verificación de datos había resultado en una censura excesiva y que la nueva medida promovería la libertad de expresión. En su lugar, Meta adoptará un sistema similar al de notas comunitarias de Twitter/X.

La forma en que Zuckerberg equipara la verificación de datos y la censura es preocupante, y la alternativa que ofrece Twitter/X conlleva numerosos **problemas**, entre ellos que la mayor parte de la desinformación se propaga antes de que las notas de usuarios puedan desmentirla. Meta ya ha sido **acusada** de dejar que sus redes sean utilizadas para difundir discursos de odio como los que

alimentaron la violencia en Birmania, India, y más recientemente **Etiopía**, al tiempo que **censuraba sistemáticamente** las publicaciones en favor de Palestina. Tras el **cambio de sus políticas**, que Trump **celebró**, ahora está permitido llamar enfermos mentales a las personas LGBTQI+ o referirse a las mujeres como propiedad.

Meta también **acordó** pagar a Trump 25 millones de dólares para resolver una demanda que interpuso después de que la empresa suspendiera sus cuentas tras la insurrección de enero de 2021, y **eliminó** sus iniciativas a favor de la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) tras los ataques del gobierno de Donald Trump contra ellas. La organización benéfica Chan Zuckerberg Initiative, propiedad del dueño de Facebook, también **despidió** a su equipo de DEI. Otras empresas tecnológicas **han seguido la misma línea**: Google abandonó sus objetivos de contratación en materia de diversidad y anunció que dejaría de celebrar eventos como el Mes de la Historia Negra y el Mes del Orgullo, mientras que Amazon eliminó la sección de diversidad e inclusión de su informe anual.

A algunos líderes tecnológicos les ha resultado fácil alinearse con el populismo de derecha. Se ven a sí mismos como personas excepcionales a quienes las reglas no se aplican. Les gusta moverse rápido y romper cosas, como decía el antiguo lema de Facebook. Desconfían del Estado, salvo quizás cuando son ellos los que están al mando. Se identifican con Trump, como se ve claramente en el caso de Elon Musk.

La movida de Musk

A menudo considerado como el hombre más rico del mundo, Musk puso su fortuna al servicio de la reelección de Trump: apareció en sus mítines, donó **288 millones de dólares** y ofreció a los votantes de los estados indecisos la posibilidad de **ganar un millón de dólares** si firmaban una petición a favor de Trump.

Musk retuitea constantemente contenido extremista. Es el usuario



Los líderes de empresas tecnológicas Mark Zuckerberg (Meta), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) y Elon Musk (Twitter/X) asisten a la toma de posesión de Donald Trump en Washington D. C., el 20 de enero de 2025.

con más seguidores y, en 2023, insistió en **cambiar el algoritmo** de la plataforma para que sus publicaciones tuvieran aún más visibilidad. Por consiguiente, todo lo que hace tiene un alcance enorme, especialmente en Estados Unidos, donde la plataforma cuenta con más usuarios, y entre los hombres jóvenes que la utilizan **de forma desproporcionada**. Desde el punto de vista económico, la compra de Twitter/X podría parecer un mal negocio, ya que la empresa valdría hoy una fracción de los 44.000 millones de dólares que Musk pagó por ella. Sin embargo, desde una perspectiva política ha sido todo un éxito. La plataforma, que antes era relativamente progresista, se ha convertido en un bastión de la derecha. Muchas voces de izquierda se han marchado, los extremistas que habían sido expulsados fueron recibidos nuevamente y Musk **interviene constantemente** para dirigir la conversación.

Desde su puesto al frente del pseudo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un líder empresarial sin mandato popular

se ha introducido en el corazón de la administración oligárquica de Trump con el objetivo explícito de recortar drásticamente el gasto público, aunque su programa tiene claramente una motivación más política que financiera. El DOGE tiene en su punto de mira a organismos federales que el bando de Trump **considera** progresistas, entre ellos el Departamento de Educación, la Oficina Nacional de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que proporciona datos sobre el clima, y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), la mayor organización de ayuda del mundo.

La congelación de los fondos de USAID decretada por Musk en enero de 2025 provocó un caos inmediato. Las personas más pobres y vulnerables del mundo se quedaron sin servicios esenciales, especialmente de salud, que les eran proporcionados a través de programas de asistencia. Por ejemplo, en Bangladesh, los campos de refugiados que acogen a los miembros de la perseguida minoría rohinyá de Birmania se vieron **desprovistos de recursos básicos**.

El impacto sobre la sociedad civil ha sido enorme. Numerosas OSC y medios de comunicación independientes que trabajan en espacios cívicos restringidos y situaciones de conflicto donde escasean los recursos nacionales dependen del apoyo de USAID. Es el caso de muchos medios de comunicación **independientes rusos y ucranianos en el exilio**, que se han visto **en apuros**.

Si finalmente los recortes se vuelven permanentes, la sociedad civil se reducirá y perderá buena parte de su capacidad para defender derechos y exigir responsabilidades a los poderosos. El hecho de que algunos de los líderes más autoritarios del mundo **aplaudieran la medida** lo dice todo. Nadie que se preocupe por la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos tomaría una medida así.

La congelación de los fondos de USAID no ha sido la única manera en la que las acciones de Musk han trascendido las fronteras estadounidenses. En repetidas ocasiones se ha inmiscuido en la política del Reino Unido, atacando al primer ministro Keir Starmer y

publicando y favoreciendo contenidos de extrema derecha. Después de una serie de **disturbios** desencadenados por la difusión de bulos sobre personas inmigrantes y de confesión musulmana, a raíz de un horrible ataque con cuchillo, **escribió** que en el Reino Unido “la guerra civil es inevitable”. También difundió **información falsa** publicada por el líder de un grupo de odio de extrema derecha y promovió la creencia errónea de que el sistema de justicia penal británico es más indulgente con las personas musulmanas.

Musk también intervino en Alemania. Antes de las **elecciones** de febrero de 2025, mantuvo una **charla acrítica** de 75 minutos con la colíder de AfD Alice Weidel durante la que afirmó que “solo AfD puede salvar a Alemania”.

El contraataque

El poder de las redes sociales depende de su número de usuarios y estos puede elegir qué plataformas usar y cuáles no. Tras la reelección de Trump, cientos de miles de personas, y varias OSC y empresas, abandonaron Twitter/X. Sin embargo, esto solo desplazó los problemas, ya que muchas migraron a Threads y, poco después, Mark Zuckerberg introdujo cambios favorables a Trump.

Los políticos nacionalistas y populistas continúan su buena racha en las nuevas plataformas de redes sociales. En 2024, Trump hizo un uso intensivo de TikTok para apelar a su público joven, y lo mismo hicieron Subianto en **Indonesia** y Georgescu en **Rumania**. En las elecciones de muchos países, como Alemania y Estados Unidos, los hombres jóvenes se están inclinando **en forma desproporcionada** por opciones populistas de derecha, una tendencia que se explica, al menos en parte, por la influencia de las redes sociales que esos jóvenes utilizan.

Gran parte del debate político se desarrolla en plataformas que



Cartel instalado por el colectivo activista Todos Odiamos a Elon Musk en una parada de autobús en Londres, Reino Unido, 12 de marzo de 2025.

existen para vender publicidad; de ahí que los algoritmos traten de mantener enganchados a los usuarios con contenidos llamativos y sensacionalistas. Esta estrategia premia los relatos simplistas y populistas frente al debate razonado y los argumentos matizados.

Pero a medida que los usuarios se muestran más selectivos con respecto a las plataformas que eligen, también se desvanece el sentimiento de pertenencia a un foro de discusión mundial. En su lugar, surge el peligro de que los usuarios se encierren en pequeñas cámaras de eco. Además, para algunas empresas y creadores no es factible abandonar una plataforma de gran alcance por otras más pequeñas y, por otro lado, las voces progresistas se niegan a ceder espacios a las fuerzas regresivas. Por si fuera poco, abandonar por completo las redes sociales es difícil porque son adictivas por naturaleza.

Dada la importancia de los ingresos publicitarios, presionar a los anunciantes es una opción. Cuando una **investigación** de la sociedad civil reveló que la incitación al odio contra los ciudadanos afroestadounidenses en Twitter/X se triplicó tras la adquisición de Musk, la plataforma perdió alrededor de 100 millones de dólares en ingresos publicitarios. También hay pruebas de que el rechazo a Musk está hundiendo las ventas de coches Tesla en Europa.

Sin una regulación ética y adecuada será difícil avanzar. Sin embargo, la regulación también puede jugar nos malas pasadas, ya que cuando los Estados prohíben las redes sociales, a menudo lo hacen para silenciar las críticas y evitar el escrutinio público. Por ejemplo, en 2024, **Bangladesh, Pakistán, las Islas Salomón** y otros países restringieron las redes sociales justamente por esta razón. En Estados Unidos, Trump suspendió la **prohibición** de TikTok decretada por Biden, que la consideraba una amenaza por ser de propiedad china. No obstante, se sospecha que en contrapartida la plataforma tendrá que vender su filial estadounidense a alguno de los partidarios de Trump, una medida que no haría más que remplazar las preocupaciones por la influencia estatal china por los temores de la parcialidad trumpista.



El Foro para la Gobernanza de Internet de 2024, supuestamente destinado a abordar las oportunidades y riesgos de la IA y otras tecnologías digitales, se celebró en Arabia Saudita, donde el Estado suele criminalizar la expresión en línea.

Sin embargo, Brasil demostró que se puede obligar a las empresas de redes sociales a rendir cuentas. Allí, el Supremo Tribunal Federal **prohibió Twitter/X** después de que la plataforma se negará reiteradamente a acatar varias órdenes judiciales y moderar el contenido de cuentas relacionadas un intento de **insurrección de extrema derecha** en enero de 2023. El tribunal le impuso multas elevadas por incumplimiento, pero poco después Twitter/X cerró sus oficinas en Brasil. Finalmente, el tribunal ordenó su cierre cuando la empresa incumplió el plazo para nombrar a un representante legal.

La medida causó controversia y la sociedad civil criticó especialmente la orden de bloquear el acceso a los servicios VPN. Aun así, independientemente de que la decisión fuera acertada o no, y de todos sus aspavientos previos, Musk dio marcha atrás. En definitiva, este caso demuestra que Musk no tiene por qué salirse con la suya

siempre y que es posible encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad de las redes sociales.

Obstáculos para la regulación

El carácter global del proyecto requiere una respuesta internacional. No se avanzó mucho en el marco de la Cumbre del Futuro 2024 de la ONU sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional que adoptó el **Pacto Digital Mundial**. La sociedad civil **participó** intensamente en el proceso, pero el texto final no reflejó necesariamente sus aportaciones sobre cuestiones clave en materia de derechos humanos. Pese a que el Pacto condena la vigilancia y reclama que se proteja la privacidad, no tiene en cuenta el género en los casos de abusos en línea y tampoco se pronuncia sobre los cortes de internet.

Pero no todo son buenas noticias en este ámbito. En agosto, la ONU aprobó la **Convención sobre Ciberdelincuencia**. No cabe duda de que es necesario combatir la ciberdelincuencia, cuyo costo habría superado los **10 billones de dólares** de dólares este año; pero también es cierto que muchos Estados califican de ciberdelincuentes a quienes expresan críticas. **Numerosos Estados** han adoptado leyes sobre la ciberdelincuencia amplias y excesivas. Por ejemplo, en 2024, las autoridades de **Indonesia, Jordania, Nigeria, Serbia** y de otros países utilizaron leyes draconianas para detener y encarcelar a personas por expresar su preocupación sobre cuestiones ambientales, denunciar casos de corrupción o solidarizarse con Palestina, entre otros motivos. Ahora esta represión podría presentarse como una consecuencia de la aplicación de la Convención.

Muchos miembros de la sociedad civil se preguntaron si hacía falta aprobar un nuevo tratado **promovido** por Rusia, puesto que bastaría con implementar los acuerdos existentes, en particular el **Convenio de Budapest** del Consejo de Europa, cuya **implementación solo ha**

sido parcial🕒. La sociedad civil intentó controlar los daños, **exigió garantías**🕒 de derechos humanos y propuso que se adoptara una definición más precisa de la ciberdelincuencia que protegiera la expresión en internet.

Si bien es mejor que el primer borrador, la versión final de tratado **sigue careciendo**🕒 de protecciones claras, específicas y aplicables en materia de derechos humanos, que quedan en manos de los órganos legislativos de cada país. Asimismo, otorga un amplio margen a los Estados para recopilar e intercambiar datos entre ellos, contribuyendo así a una posible y preocupante ampliación de sus poderes de vigilancia. La sociedad civil pide a los Estados que pidan consejo antes de ratificarla y que garanticen que su respuesta a la ciberdelincuencia es compatible con el respeto de los derechos humanos.

En diciembre, el Foro de la ONU sobre la Gobernanza de Internet no ofreció muchas oportunidades a la sociedad civil para debatir sobre el tratado. Sorprendentemente, la reunión corrió a cargo del autoritario régimen de Arabia Saudita y no solo eso: cuando la sociedad civil trató de poner de relieve que el gobierno anfitrión es uno de los que encarcela a más personas por expresarse en línea, el personal de la ONU presuntamente habría **eliminado el contenido crítico**. La ONU debe como mínimo garantizar espacios internacionales seguros para debatir problemáticas relacionadas con la tecnología y los derechos humanos.

En cuanto a la IA, el avance normativo más significativo de 2024 fue la entrada en vigor de la Ley de IA de la UE. Una vez más, la **participación de la sociedad civil**🕒 en el proceso logró varias mejoras, entre ellas el establecimiento de límites a la identificación biométrica y la inclusión de evaluaciones de impacto sobre los derechos fundamentales. Pese a esto, la ley suscita **una gran preocupación** debido a las garantías insuficientes para los derechos humanos. Por ejemplo, la normativa no se aplica a los sistemas de IA que se utilizan en el ámbito de la seguridad nacional, contiene lagunas que permiten ciertos sistemas de vigilancia y no otorga los mismos derechos a las personas inmigrantes que a los ciudadanos de la UE. Además, sigue habiendo la posibilidad de que los Estados más represivos de la UE, como Hungría y Eslovaquia, usen la IA contra la sociedad civil, y de que los Estados se sirvan de ella para reducir progresivamente los derechos de las personas migrantes.

Está claro que no se puede confiar en que los líderes tecnológicos se autorregulen, ya sea que se trate de Musk, Zuckerberg u otros con un perfil más bajo. Tampoco podemos dejar la regulación en manos de los Estados. En tiempos difíciles, es indispensable reafirmar el papel central de los derechos humanos y promover normas internacionales consistentes con ellos. Asimismo, es urgente que las voces de la sociedad civil ocupen un lugar central en este debate crucial.



LUCHAS DE GÉNERO: REACCIÓN, RESISTENCIA Y PERSEVERANCIA



LOS DERECHOS DE GÉNERO ESTÁN RETROCEDIENDO EN TODO EL MUNDO DEBIDO AL AUGE DEL POPULISMO DE DERECHA Y LAS POLÍTICAS ANTIDERECHOS.



LAS LEYES ANTI-LGBTQI+ SE ESTÁN EXTENDIENDO EN TODAS LAS REGIONES DEL MUNDO Y ESTÁN SIENDO CADA VEZ MÁS UTILIZADAS COMO HERRAMIENTA DE CONTROL POLÍTICO.



LA SOCIEDAD CIVIL SIGUE COSECHANDO VICTORIAS A FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS PERSONAS LGBTQI+ A FUERZA DE PERSEVERANCIA Y RESISTENCIA ESTRATÉGICA.

El retroceso de las iniciativas de DEI respaldado con tanto entusiasmo por las principales empresas tecnológicas es una de las formas en que el regreso de Trump ha desmantelado rápidamente las protecciones de los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+. Estos derechos están siendo atacados por populistas de derecha en todo el mundo.

Al mismo tiempo, la congelación de los fondos de USAID afectará desproporcionadamente a mujeres y niñas, sobre todo en las zonas de conflicto, el mundo rural y los países menos desarrollados. El Instituto Guttmacher **estima** que la medida negará acceso a anticoncepción a 11,7 millones de mujeres, lo cual podría resultar en 4,2 millones de embarazos no deseados y más de 8.300 muertes maternas. Incluso si se descongelan los fondos, no se volverá a la normalidad, ya que el gobierno de Trump ha restablecido la **ley mordaza global**, que restringe las ayudas a las organizaciones que ofrezcan servicios de interrupción del embarazo o defiendan el derecho al aborto. Durante el primer mandato de Trump, esta política **provocó** alrededor de 108.000 muertes maternas e infantiles y 360.000 nuevas infecciones por VIH.



En vísperas del Día Internacional de la Mujer, manifestantes en Roma, Italia, denuncian el apartheid de género y reclaman que la ONU reconozca la opresión sistemática de las mujeres como un crimen contra la humanidad, 7 de marzo de 2025.

Estos cambios se inscriben en el marco de la batalla mundial de los movimientos de derecha contra la igualdad de género. Las encuestas revelan que, incluso en países que recientemente han adoptado políticas que amplían derechos, cada vez más personas, especialmente los hombres jóvenes, creen que las iniciativas para promover la igualdad de género han ido demasiado lejos. Sin embargo, como muestra el **Índice de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)**, hasta a los países más progresistas les queda mucho para lograr la igualdad de género.

Activistas de todos los continentes atribuyen gran parte de la reacción a la creciente organización y movilización de fuerzas antiderechos. Estos grupos difunden bulos en las redes sociales, incitan al odio y la misoginia, una estrategia transnacional que llega hasta los foros internacionales. A lo largo de los años, y también en 2024, las activistas han **constatado** la presencia creciente de

grupos antigénero en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que se reúne cada mes de marzo con el objetivo de promover la igualdad de género.

Panorama global de erosión de derechos

La erosión de los derechos sigue un patrón inquietante y se extiende por múltiples regiones. El ejemplo más extremo de la regresión de la igualdad de género sigue siendo **Afganistán**, donde los talibanes han construido metódicamente un **apartheid de género** total. Las mujeres han sido despojadas sistemáticamente de sus derechos al trabajo, la educación y el ocio, y progresivamente confinadas en sus hogares con el fin de **silenciarlas literalmente** y de expulsarlas de la vida pública.

En **Irán**, las consecuencias de las protestas generalizadas de 2022 y 2023, provocadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven detenida por infringir la ley sobre el hiyab, demostraron que el régimen teocrático estaba dispuesto a todo para mantener el control. La represión brutal se saldó con más de 500 muertes, miles de personas heridas y muchas más encarceladas. Le siguió una **oleada de ejecuciones** que buscaban sembrar miedo y **desalentar** nuevas movilizaciones.

En Irak, las **enmiendas** en curso a la Ley del Estatuto Personal de 1959 también suscitan gran preocupación, ya que el Parlamento podría rebajar la edad mínima para contraer matrimonio a nueve años y eliminar los derechos de las mujeres al divorcio, la custodia y la herencia. La situación de las personas LGBTQI+ sigue siendo calamitosa. Este año se **aprobaron leyes** que castigan con severas penas de prisión las identidades trans y las relaciones homosexuales.

En **Rusia** 🇷🇺, la campaña del gobierno contra la “propaganda antinatalista” supone una nueva forma de control estatal sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres. El Parlamento aprobó un proyecto de ley que prohíbe la promoción del “estilo de vida sin hijos” en medios de comunicación, películas y contenidos digitales. El gobierno asegura que busca promover los “valores familiares tradicionales” y hacer frente a los desafíos demográficos que se han exacerbado con la guerra en Ucrania. Esta medida se inscribe en una tendencia populista y nacionalista de derecha que ha surgido en los últimos años. Países como Hungría e Italia han implementado políticas de este tipo para contrarrestar el descenso de la natalidad. Las motivaciones son, al menos en parte, racistas, y se inspiran en la teoría conspirativa supremacista blanca del “gran reemplazo”, según la cual las poblaciones cristianas blancas están siendo sustituidas por personas musulmanas negras y morenas. Estas políticas encajan con las restricciones al aborto, los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTQI+.

Georgia 🇬🇪 siguió el ejemplo de Rusia y también aprobó una ley que impone **severas restricciones** 🇬🇪 a las personas y organizaciones LGBTQI+. Bulgaria adoptó medidas similares: pese a las protestas callejeras, el Parlamento **aprobó** 🇬🇪 por una mayoría considerable una ley de educación que prohíbe la “propaganda LGBTQI+” en las escuelas. La iniciativa buscaba atraer a los votantes de extrema derecha en un momento de inestabilidad política. Propuesta por un partido prorruso, la medida penaliza el debate sobre orientaciones sexuales e identidades de género no tradicionales en los centros educativos. Al igual que en Rusia, la nueva legislación considera que los derechos de las personas LGBTQI+ suponen una amenaza para la protección de la infancia.

En Turquía, las personas y organizaciones LGBTQI+ enfrentan una escalada de difamación y criminalización, así como a la prohibición de marchas y símbolos del Orgullo. El último objetivo en la lista ha sido la organización de la sociedad civil Tarlaşağı Toplum Merkezi. El

Ministerio de Familia y Asuntos Sociales, la Oficina del Gobernador de Estambul, políticos del gobierno y medios de comunicación progubernamentales han **presionado para que la cierren** 🇹🇷. Esta campaña coordinada demuestra que los ataques contra las mujeres forman parte de un programa político más amplio del presidente Recep Tayyip Erdoğan, quien intenta atraer a votantes socialmente conservadores para mantenerse en el poder.

En **China** 🇨🇳, el gobierno totalitario tiene en el punto de mira a las activistas defensoras de los derechos de las mujeres, ya que considera que su activismo independiente constituye una amenaza para su monopolio del poder. En junio, las autoridades chinas condenaron a Sophia Huang Xueqin, destacada activista del movimiento #MeToo, y a Wang Jianbing, activista defensor de los derechos laborales y militante contra el acoso laboral, a cinco y tres años y medio de prisión, respectivamente, por “incitar a la subversión del poder del Estado”.

En varios países africanos se han adoptado nuevas leyes contra los derechos de las personas LGBTQI+, a menudo por oportunismo político. En **Mali** 🇲🇱, en el marco de su ofensiva contra los derechos, la junta militar aprobó una ley que penaliza la homosexualidad. En **Ghana** 🇬🇭, el Parlamento aprobó un draconiano proyecto de ley “anti-LGBTQI+”, y en **Uganda** 🇺🇬, el Tribunal Constitucional confirmó la severa **Ley contra la Homosexualidad** 🇺🇬. En Kenia, sigue pendiente de aprobación parlamentaria un **proyecto de ley de protección de la familia** 🇰🇪 que podría ilegalizar la labor de incidencia en favor de los derechos de las personas LGBTQI+. En **Malawi** 🇲🇼, el Tribunal Constitucional desestimó una petición que cuestionaba la penalización de las relaciones homosexuales, argumentando que no hay pruebas de que dicha medida sea discriminatoria.

Defendiendo derechos contra viento y marea

La sociedad civil sigue cosechando importantes victorias en entornos políticos difíciles. **Tailandia** se convirtió en el primer país del Sudeste Asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que **Grecia** se convirtió en el primer país de mayoría cristiana ortodoxa en hacerlo. En **Corea del Sur**, el Tribunal Supremo desestimó un recurso del gobierno y declaró que las parejas del mismo sexo tienen derecho a las mismas prestaciones sanitarias que las parejas heterosexuales. **Alemania** y **Suecia** aprobaron leyes que facilitan el cambio legal de género a las personas trans. En Australia, el estado de **Nueva Gales del Sur** prohibió las terapias de conversión, una práctica pseudocientífica que especialistas en derechos humanos equiparan a la tortura, mientras que **Kentucky** se convirtió en el 24º estado de Estados Unidos en prohibirlas.

En un contexto de intensa reacción a nivel nacional, el activismo estadounidense **consiguió victorias** a nivel estadual: varios tribunales estatales dictaron sentencias para proteger el derecho a la identidad de género y varias legislaturas ilegalizaron las prohibiciones de libros y aprobaron “leyes escudo” para proteger a quienes cruzan las fronteras estatales para acceder a servicios de salud reproductiva o tratamientos de afirmación de género. Los derechos reproductivos siguen siendo un **campo de batalla**. Aunque el aborto está prohibido o restringido en **19 estados**, **siete de los 10** estados donde el tema se sometió a consulta popular en 2024 se pronunciaron a favor de ampliar o proteger el acceso al aborto.

Francia reforzó su protección de los derechos reproductivos al **consagrar** el derecho al aborto en su Constitución. Esta medida contrasta fuertemente con las luchas incesantes en otros países europeos. En Polonia, que tiene una de las **leyes más estrictas sobre el aborto**, las iniciativas para despenalizar la asistencia al aborto se **frustraron** por un escaso margen en el Parlamento, pese a que la **nueva coalición de gobierno** se había comprometido a una



Celebración el 18 de junio de 2024, al convertirse Tailandia en el primer país del sudeste asiático en reconocer legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Foto de Chanakarn Lacsarakham/AP via Getty Images.

reforma. El cambio progresista **tampoco se materializó** en Irlanda, donde dos iniciativas para modernizar la Constitución ampliando la definición de familia más allá del matrimonio tradicional y eliminando el lenguaje sexista sobre el papel de la mujer en el hogar fueron ampliamente rechazadas en sendos referendos.

En Francia, el debate se extendió más allá de los derechos reproductivos a raíz de las **manifestaciones** de septiembre que congregaron a miles de personas en apoyo de la sobreviviente de violación Gisèle Pelicot. El valiente testimonio de Pelicot sobre los horribles abusos que padeció podría servir de catalizador para una reforma legislativa que instituya una definición de violación basada en el consentimiento, como sucedió en **Polonia** en junio. También en respuesta a sucesos horribles hubo demandas de justicia en la **India**, donde la violación y el asesinato de una estudiante de medicina de 31 años desencadenó manifestaciones masivas contra la violencia de género.



Foto de Amanda Perobelli/Reuters via Gallo Image

Protesta en San Pablo, Brasil, contra un proyecto de ley que clasificaría como asesinato al aborto después de la 22ª semana de gestación, 15 de junio de 2024.

La lucha por los derechos reproductivos sigue siendo especialmente difícil en Centroamérica. En **Honduras**🇸🇻, activistas presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un caso que cuestiona la prohibición total del aborto vigente en el país. En El Salvador, donde rige una legislación igualmente restrictiva, las activistas aguardan con expectación una **sentencia**🇸🇻 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que esperan allane el camino hacia la legalización del aborto.

En Brasil, donde el aborto solo es legal en caso de violación, malformación del feto o peligro para la vida de la persona gestante, miles de mujeres **se movilizaron**🇧🇷 contra un proyecto de ley que tipificaría el aborto después de la semana 22 como homicidio, punible con penas de 6 a 20 años de prisión. El proyecto, promovido por representantes evangélicos, castigaría con mayor severidad a quienes abortan que a los violadores. La indignación popular mantuvo a raya a la amenaza antiderechos, ralentizando el avance del proyecto.

En Argentina, las manifestaciones del movimiento #NiUnaMenos contra la violencia de género volvieron a las calles en junio. En **febrero de 2025**, la población argentina volvió a **manifestarse**🇦🇷 contra el discurso homóforo del presidente Javier Milei y mostrar su rechazo a los planes de su **gobierno de extrema derecha**🇦🇷 para eliminar el femicidio como una forma agravada de homicidio del Código Penal.

A pesar de las crecientes restricciones, los movimientos feministas africanos mantuvieron la **violencia de género**🇰🇪 en la agenda pública gracias a una combinación de movilización callejera, incidencia política y campañas digitales. En Kenia, las manifestaciones del movimiento #EndFemicideKE **animaron a las sobrevivientes**🇰🇪 a reclamar justicia y obtuvieron nuevos compromisos del gobierno; sin embargo, la policía las reprimió al igual que lo hizo con las protestas por motivos económicos. En noviembre, las activistas volvieron a **reclamar**🇰🇪 medidas contra el aumento de los femicidios durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pero la policía las dispersó con gases lacrimógenos. En **Somalia**🇸🇴 también hubo protestas contra los femicidios.

La lucha mundial para prohibir el matrimonio infantil cosechó éxitos en **Colombia**🇨🇴 y **Sierra Leona**. En Gambia, gracias a las protestas generalizadas, el activismo logró una importante victoria al conseguir que **se rechazara un proyecto de ley**🇬🇲 que buscaba despenalizar la mutilación genital femenina (MGF), una práctica **proscrita en 2015**. Actualmente, esta **práctica sigue siendo ilegal** y se castiga con hasta tres años de cárcel. Este resultado es un buen ejemplo del poder de la acción coordinada de la sociedad civil.

Mientras tanto, en **Namibia**🇳🇦, el Tribunal Supremo abolió las disposiciones de la época colonial que penalizaban los actos homosexuales entre hombres, a contracorriente de la tendencia regresiva regional en el ámbito de los derechos de las personas LGBTQI+. Aunque la prohibición se aplicaba rara vez, fomentaba la discriminación y la violencia, e impedía que las personas del colectivo accedieran a servicios sanitarios. Sin embargo, este avance suscitó



Foto de Manon Cruz/Reuters via Gallo Images.

Una manifestante sostiene un cartel que dice "La vergüenza cambia de bando" en apoyo de la sobreviviente de violación Gisèle Pelicot frente a un juzgado de Aviñón, Francia, 23 de noviembre de 2024.

reacciones negativas y, tan solo unos meses después, desembocó en la promulgación de una ley que **prohibió** el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En Kenia, donde la homosexualidad sigue estando penalizada, un tribunal dictó una sentencia provisional a raíz de una petición de un grupo de activistas en la que ordenó a los individuos y grupos anti-LGBTQI+ que se abstuvieran de incitar a la violencia contra el colectivo. Esta decisión supuso un **alivio temporal** frente a los discursos de odio, las campañas de difamación y las amenazas de violencia.

En el Caribe, el Tribunal Supremo de **Dominica** derogó una prohibición de la época colonial sobre las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo en respuesta a una demanda de la sociedad civil, tras victorias recientes similares en Antigua y Barbuda, Barbados y San Cristóbal y Nieves. Como en otros lugares, los activistas **reconocieron** que el cambio legal es solo un paso en un camino mucho más largo, y siguen trabajando para cambiar las actitudes y los comportamientos dentro de la sociedad, al tiempo que presionan para conseguir cambios similares en los cinco Estados caribeños de la Commonwealth que aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos se encuentra **San Vicente y las Granadinas**, donde años de activismo culminaron en una decepción: el Tribunal Supremo rechazó un recurso y mantuvo la penalización. En las **Islas Turcas y Caicos**, activistas también ha interpuesto un recurso contra la legislación discriminatoria hacia las personas LGBTQI+, solicitando la igualdad de derechos con las parejas casadas.

Incluso en los entornos más represivos, las activistas encuentran formas de resistir. Las mujeres afganas e iraníes siguen movilizándose para que el apartheid de género sea reconocido como un delito en el derecho internacional, a fin de facilitar la rendición de cuentas y los procesos de reparación. A nivel nacional, las activistas han recurrido a formas más sutiles de desobediencia civil para mantener la presión sin poner en peligro sus vidas.



Con acciones en varios continentes, los **16 Días de Activismo contra la Violencia de Género** fueron la culminación de un año de iniciativas feministas promovidas desde las bases. Asimismo, los **eventos del Orgullo** celebrados en todo el mundo fueron un ejemplo de resistencia frente a la reacción. Mediante estos eventos, y pese a que en algunos casos hubo restricciones al derecho de reunión y **violencia** procedente de grupos antiderechos, el activismo mantuvo la visibilidad del colectivo LGBTQI+ y se mostró desafiante ante los intentos de negar a las personas LGBTQI+ el derecho a existir en público. Los actos del Orgullo tuvieron un carácter festivo, pero también una fuerte dimensión reivindicativa: los participantes celebraron victorias trabajosamente conseguidas, mostraron unidad y determinación frente a la adversidad y expresaron solidaridad con quienes, en entornos más restrictivos, son privados de la posibilidad de movilizarse.

Razones para la esperanza

La magnitud de los **desafíos** es desalentadora, pero hay motivos para la esperanza. Junto con las victorias y las derrotas, 2024 también nos ha dejado valiosas enseñanzas, entre ellas que el progreso no es lineal ni inevitable, y que requiere una vigilancia constante, incluso en contextos aparentemente progresistas. Numerosos cambios en el panorama político pusieron en cuestión muchos derechos legalmente reconocidos. En este sentido, activistas de Dominica, **Grecia** y

de otros países destacaron que quedó patente que los cambios legislativos deben ir acompañados de una transformación social mucho más laboriosa para lograr un impacto duradero.

La importancia de la interseccionalidad se hizo especialmente evidente en las victorias del año. En Tailandia, el éxito de la campaña a favor del matrimonio igualitario se debió, al menos en parte, a su **confluencia** con el joven movimiento democrático del país. En Irán, las mujeres y las personas LGBTQI+, dos grupos perseguidos y reprimidos por el régimen teocrático, también están en la **primera línea** de la lucha por la liberación.

La solidaridad internacional sigue siendo crucial, sobre todo para apoyar a activistas en los entornos más represivos. Sin embargo, la creciente interconexión y sofisticación de los movimientos antiderechos, tanto en el ámbito nacional como internacional, implica que los defensores de los derechos también deben reforzar sus redes y estrategias transnacionales.

De cara al futuro, el principal desafío sigue siendo apoyar y fortalecer los movimientos para hacer frente a la reacción y, al mismo tiempo, proteger los logros conseguidos con tanto esfuerzo. Las experiencias de 2024 demuestran que, incluso frente a una fuerte represión y una oposición organizada, la sociedad civil puede lograr avances significativos mediante la creatividad, la perseverancia y la adaptación de sus estrategias.



DERECHOS MIGRANTES: HUMANIDAD VERSUS HOSTILIDAD



EL NÚMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS HA BATIDO UN NUEVO RÉCORD; LA MAYORÍA DE LOS REFUGIADOS SON ACOGIDOS POR PAÍSES DEL SUR GLOBAL.



A PESAR DE QUE RECIBEN MENOS INMIGRANTES, LOS ESTADOS DEL NORTE GLOBAL ADOPTAN POLÍTICAS CADA VEZ MÁS RESTRICTIVAS, IMPULSADAS POR UN GIRO HACIA LA DERECHA.



LA SOCIEDAD CIVIL SIGUE DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES PESE A LA CRECIENTE CRIMINALIZACIÓN DE SU LABOR HUMANITARIA.

Las mismas fuerzas regresivas que atacan los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ también persiguen a migrantes y refugiados. Sus posiciones en cuanto a estos últimos están encontrando una gran acogida aún mayor entre muchos gobiernos. El aumento de la hostilidad política implica que la sociedad civil enfrenta desafíos cada vez mayores para proteger los derechos de las personas migrantes. La situación se está volviendo especialmente difícil en América del Norte y la UE, dos grandes rutas migratorias en las que se ha consolidado la preocupante tendencia a priorizar el control de las fronteras por encima de los derechos humanos.

Las políticas antinmigración no quieren reconocer el hecho incontestable de que hay más personas en movimiento que nunca. Cada año se supera el récord en el número de migrantes y refugiados, y 2024 no será una excepción. Se calcula que actualmente hay **123 millones** de desplazados forzosos en todo el mundo, de los cuales **75,9 millones** son desplazados internos. Solamente el conflicto de Sudán ha provocado casi **11 millones** de desplazamientos internos, la cifra más alta jamás registrada en un solo país. Muchos de ellas huyen a los vecinos Chad y Sudán del Sur, que enfrentan sus propias crisis humanitarias.

A los millones que han huido de Ucrania, se le suman los dos millones de personas que se han convertido en desplazados internos en la RDC, una cifra similar a la registrada en Gaza y el Líbano. En las **Américas** continúa uno de los mayores movimientos migratorios contemporáneos. Se estima que unos ocho millones de venezolanos han huido del país desde 2015, el mayor desplazamiento forzado que no haya sido provocado por una guerra.

El actual aumento de la migración se debe a una compleja interacción de factores: conflictos, persecución política, violaciones de derechos humanos, dificultades económicas y desastres climáticos. Pese a esto, el rechazo político hacia las personas obligadas a desplazarse no suele abordar las causas.

Los marcos actuales para entender la migración, en particular la distinción artificial entre migración voluntaria y desplazamiento forzoso, resultan cada vez más obsoletos y no reflejan la compleja realidad de los desplazamientos, ya que la necesidad económica puede ser tan coercitiva como la persecución directa. Además, la realidad también desmiente los prejuicios: al contrario de lo que afirman quienes se oponen a la inmigración, la mayor parte de las migraciones se produce entre países del sur global, y no del sur al norte. De hecho, al menos el **71%** de los refugiados internacionales del mundo son acogidos en países del sur global y el 69% permanece en países vecinos a los suyos.

Aumento de restricciones en el norte global

En Estados Unidos, las políticas migratorias se han vuelto progresivamente más restrictivas. Durante el primer gobierno de Donald Trump, el país aplicó una política de disuasión caracterizada por la separación de familias, la construcción de unos 130 kilómetros de **nuevas barreras** fronterizas con México con fines propagandísticos,



Fila de personas esperando para entregarse a las autoridades estadounidenses tras cruzar el Río Grande desde México, 7 de marzo de 2024.

y la aplicación de la política **Permanecer en México**, que obligaba a las personas solicitantes de asilo a esperar en ese país hasta la resolución de sus casos ante los tribunales de inmigración estadounidenses. Estas políticas fueron ampliamente condenadas por las organizaciones de derechos humanos. Posteriormente, el gobierno de Biden aplicó una estrategia mixta, combinando medidas humanitarias y restrictivas: si bien revocó algunas de las medidas restrictivas de su predecesor, también aplicó normas de asilo más estrictas y aumentó las **expulsiones bajo el Título 42**, una política adoptada durante la pandemia para expulsar rápidamente de las fronteras estadounidenses a las personas migrantes.

La Patrulla Fronteriza estadounidense **informó** de más de 2,1 millones de contactos en la frontera con México durante el año fiscal 2024, una disminución respecto a los 2,5 millones de 2023. Esta cifra se atribuyó a un nuevo enfoque basado en la restricción

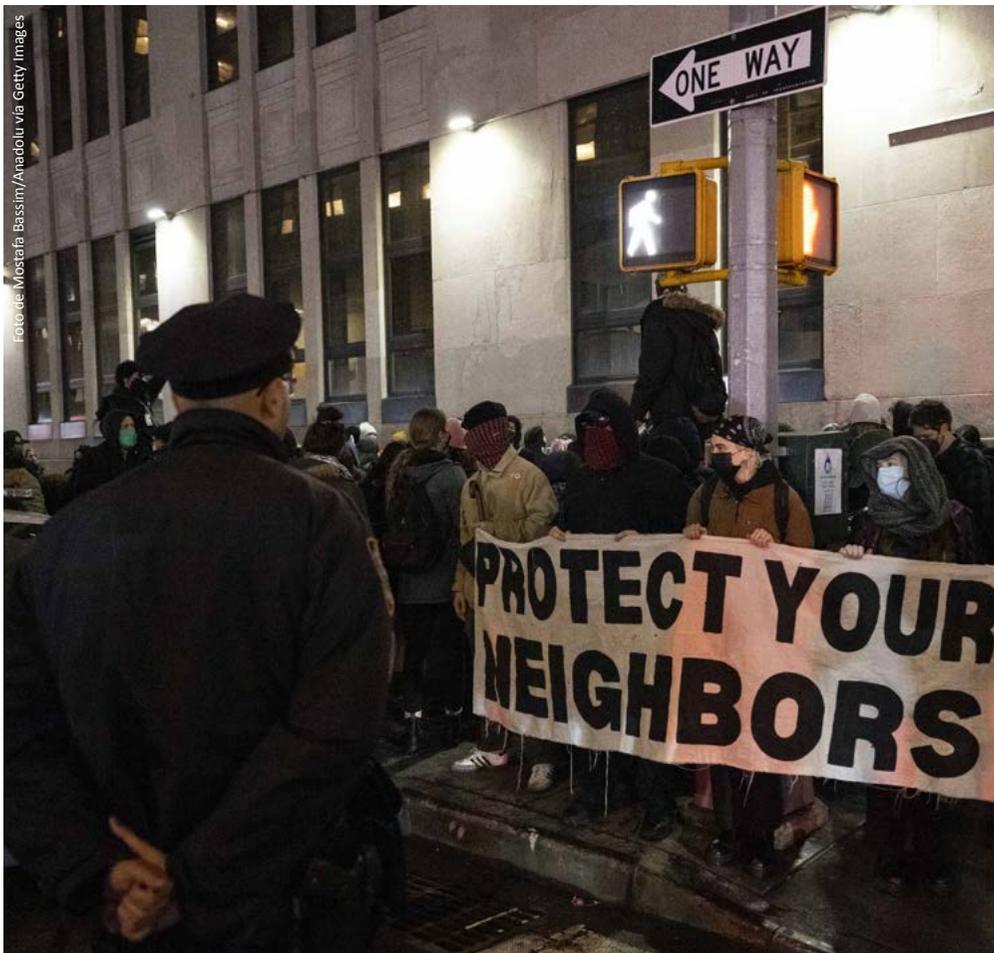


Foto de Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images

Marcha de protesta contra las redadas contra inmigrantes en Nueva York, Estados Unidos, 13 de febrero de 2025.

del derecho de asilo para quienes cruzaban la frontera de forma irregular y la ampliación de las vías legales de inmigración. Sin embargo, esto cambió el primer día del segundo mandato de Trump con una cascada de decretos que declararon una “**emergencia nacional**” en la frontera sur del país, autorizaron el despliegue de militares, cancelaron la **aplicación móvil** para procesar solicitudes, suspendieron todas las entradas al territorio mediante una declaración de “invasión” y disolvieron el grupo de trabajo de reunificación familiar que aún se esforzaba por reunir a las familias que habían sido separadas durante el primer mandato de Trump.

El día de su toma de posesión, Trump **ordenó** a las autoridades migratorias que detuvieran a “tantas personas como permitiera la ley” y poco después comenzaron las redadas, amparadas en la **promesa** de implementar el mayor programa de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Este nuevo enfoque, que vincula la inmigración ilegal con la delincuencia y habla de una invasión que remite a la teoría conspirativa del “gran reemplazo”, generó una gran preocupación ante el riesgo de que aumentara la violencia contra las personas migrantes.

En Europa, el auge de las políticas populistas de derecha ha llevado a priorizar el control de las fronteras por encima de los derechos humanos. Una **reunión** de líderes europeos de extrema derecha celebrada en Madrid en febrero de 2025 evidenció el aumento del sentimiento antiinmigración. En representación del grupo Patriotas por Europa, que cuenta con 86 escaños en el Parlamento Europeo, líderes de extrema derecha como la francesa Marine Le Pen, el húngaro Viktor Orbán y el español Santiago Abascal se posicionaron explícitamente en contra de lo que denominan “políticas de inmigración de puertas abiertas”. Afirman que la inmigración desestabiliza las naciones y amenaza la identidad y la cultura europeas. Esta coalición obtuvo más de 19 millones de votos en las elecciones al Parlamento Europeo.

Incluso cuando disminuía el número de personas que ingresaban



Foto de Florion Goga/Reuters via Gallo Images

Protesta en Shëngjin, Albania, contra el acuerdo de procesamiento de migrantes entre Italia y Albania mientras arriba un buque de la Marina italiana con solicitantes de asilo, 16 de octubre de 2024.

en la UE, la respuesta de la Comisión Europea a la creciente presión política fue desarrollar el Pacto de Migración, un amplio paquete legislativo destinado a facilitar las expulsiones y permitir a los Estados miembros cerrar sus fronteras por motivos de seguridad. La estrategia de la UE ha priorizado cada vez más la disuasión y ha externalizado el control de las fronteras a Estados no europeos, como demuestran los **controvertidos acuerdos** con los gobiernos autoritarios de **Egipto** y Túnez. A través de estos pactos, la UE proporciona importantes fondos a cambio de medidas reforzadas para impedir la llegada de personas migrantes a Europa. Estos acuerdos son similares a los firmados con Turquía en 2016, que permitieron nuevas violaciones de derechos humanos. Todas estas medidas han provocado **mueres evitables** en las fronteras de la UE y han **erosionado** la credibilidad de la UE, que pretende erigirse en defensora de los derechos humanos y aliada de la sociedad civil.

En 2024, algunos Estados de la UE adoptaron medidas similares a la política **impulsada previamente por el Reino Unido**, donde el anterior gobierno intentó trasladar a las personas solicitantes de asilo a Ruanda para que gestionaran sus solicitudes desde allí. El nuevo gobierno descartó ese plan, aunque argumentó razones de costo y eficiencia, mientras que los discursos hostiles continuaron.

El **gobierno de derecha** de Italia acordó externalizar la gestión de las solicitudes de asilo y retorno a **Albania**, autorizando el traslado de las personas migrantes rescatadas por embarcaciones italianas en aguas internacionales a nuevos centros de detención en territorio albanés financiados y administrados por Italia. Esta política buscaba generar un efecto disuasorio y, aunque en un principio fue **bloqueada** por la acción judicial de la sociedad civil, finalmente **se reanudó**. No obstante, los centros de detención permanecen vacíos tras una nueva **sentencia judicial** que ordenó al gobierno devolver a Italia a las personas allí retenidas. Pese a estos contratiempos, la primera ministra italiana Giorgia Meloni sigue consolidándose como una figura influyente en la UE, y la Comisión Europea **respalda** la posición de su gobierno en un caso ante el Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la política.

En los Países Bajos también se ha presentado un plan de externalización. El Partido por la Libertad ha propuesto enviar a Uganda a los solicitantes de asilo rechazados a cambio de ayuda económica para el país. Los grupos de defensa de derechos rechazan esta renuncia a las obligaciones de protección del Estado y **subrayan** el problemático historial de Uganda en materia de derechos humanos, así como sus leyes contra el colectivo LGBTQI+.

Alemania modificó su política de exención de pasaportes dentro del espacio Schengen y aumentó los controles fronterizos. Grupos de la sociedad civil advierten de que estas medidas supuestamente temporales podrían volverse permanentes y servir de precedente para que otros países europeos adopten estrategias similares. Estos cambios políticos reflejan el **ascenso de la extrema derecha**, que ha llevado a varios estados alemanes a promover medidas cada vez más estrictas, entre ellas la implementación de normas de expulsión más duras, la reducción de prestaciones sociales, mayores restricciones a la reagrupación familiar y la ampliación de las competencias para la aplicación de las leyes de inmigración.

La instrumentalización política de la inmigración

En muchas de las elecciones de 2024, diversas figuras políticas manipularon cínicamente la preocupación por la inmigración y exacerbaron las tensiones deliberadamente. La inmigración fue un tema crucial en varias campañas electorales, en las que los partidos de derecha y, cada vez más, los de centro adoptaron posturas intransigentes.

Esta instrumentalización suele implicar el uso de información falsa o engañosa sobre las personas inmigrantes, exagerando la magnitud de

la inmigración y vinculándola con la delincuencia y otros problemas sociales, un discurso que deshumaniza a las personas inmigrantes y fomenta un clima de miedo y hostilidad.

En el Reino Unido, la inmigración fue un **tema dominante** en el periodo previo a las **elecciones de julio**. El gobierno conservador se enfrentó a una **presión constante** provocada por el número de cruces irregulares del Canal de la Mancha. Tras su victoria, el Partido Laborista adoptó un tono más agresivo, mientras que el partido populista de derecha Reform UK ha hecho de la inmigración su tema central y ahora lidera algunas encuestas. Como se puede ver, en materia de inmigración, el debate político se ha escorado a la derecha.

En las elecciones al Parlamento Europeo, los partidos de extrema derecha que se presentaban con programas explícitamente antiinmigración lograron **avances considerables**. Destacaron la **importante victoria** de la Agrupación Nacional en Francia, el mejor resultado de la historia de AfD en Alemania y el 28% de votos obtenidos por Hermanos de Italia, el partido de Meloni. A contracorriente de esta tendencia, los partidos de extrema derecha antiinmigración obtuvieron **peores resultados** en los países nórdicos. Si bien estuvieron en auge hace solo unos años, fueron superados por los partidos de izquierda, en parte porque los partidos de extrema derecha ya habían estado en el gobierno en varios países y algunos votantes estaban desencantados con ellos.

Es probable que el aumento de la representación de los partidos de extrema derecha en el Parlamento Europeo tenga un impacto significativo en la política migratoria de la UE, ya que estos grupos presionan para que se apliquen controles fronterizos más estrictos, se reduzca la inmigración y se prioricen intereses soberanistas.

La inmigración fue, sin duda, uno de los temas más polémicos y decisivos de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024. La cuestión de la frontera entre Estados Unidos y México atrajo la atención de los dos principales partidos políticos y se entrelazó con

otras cuestiones importantes de la campaña, como la seguridad pública, la política económica y la seguridad nacional. La victoria de Trump sugiere que ganó el debate sobre estos temas. Mientras tanto, la sociedad civil advirtió en todo momento que la politización de la inmigración solo agravaría el sufrimiento y aumentaría el número de muertes entre quienes intentan cruzar hacia Estados Unidos.

La politización de la inmigración no se limita al norte global y así lo demostraron los discursos populistas antiinmigración antes de las elecciones en Túnez. En la República Dominicana, la inmigración haitiana también fue un tema clave durante la campaña de las elecciones presidenciales de mayo, durante la cual la mayoría de los candidatos buscaron rédito político **explotando los prejuicios racistas** de la sociedad dominicana. De esta manera, legitimaron aún más la violación sistemática de los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes nacidos en la República Dominicana, a muchos de los cuales se les niega la ciudadanía. En la India, en vísperas de las elecciones a la Asamblea Legislativa de Delhi de febrero de 2025, los dos principales partidos de la asamblea **compitieron** por ver cuál podía mostrarse más hostil hacia los inmigrantes bangladeses.

Respuestas de la sociedad civil

La sociedad civil desempeña una labor esencial en la defensa de los derechos de las personas migrantes en un contexto marcado por una hostilidad política creciente y la intensificación de políticas restrictivas. Sus miembros llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate en el mar, ofrecen ayuda humanitaria, documentan violaciones de derechos, facilitan la integración en las comunidades de acogida, exigen cambios políticos y desarrollan actividades de educación y sensibilización contra la xenofobia y la discriminación. Pese a esto, activistas y organizaciones que asisten a personas inmigrantes y refugiadas enfrentan consecuencias legales con mayor frecuencia.



La criminalización de la solidaridad es particularmente flagrante en el sur de Europa. Los grupos humanitarios que llevan a cabo misiones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, donde **más de 2200 personas migrantes** murieron ahogadas en 2024, están bajo fuerte presión de gobiernos que consideran que sus operaciones socavan sus políticas fronterizas.

En 2023, Italia declaró ilegal que las organizaciones de búsqueda y rescate realizaran más de un rescate por viaje y estableció que, en caso de incumplimiento, se les impondrían fuertes multas y se incautarían sus embarcaciones. No es raro que las autoridades italianas desvíen las embarcaciones de rescate a puertos lejanos, obligándolas a recorrer largas distancias para desembarcar a los supervivientes, y emitan órdenes de detención basadas en acusaciones dudosas sobre la violación de la seguridad marítima. Por ejemplo, en agosto emitieron una **orden de detención de 60**

días contra el buque Geo Barents, de Médicos Sin Fronteras, por supuestamente poner en peligro la vida de personas, basándose en información de la Guardia Costera libia. En diciembre, SOS Mediterráneo **se vio obligada** a recorrer más de 1600 kilómetros para poner a salvo a 162 supervivientes, después de que las autoridades ignoraran sus peticiones para desembarcar en un puerto más cercano. Estas acciones lograron su objetivo y redujeron el número de embarcaciones activas, lo que provocó un aumento de las muertes.

En diciembre, el Consejo Europeo elaboró un texto sobre **nuevas normas de la UE** en materia de tráfico ilícito de migrantes que será examinado por el Parlamento Europeo. Las voces críticas **advierten** que estas normas podrían criminalizar aún más a las personas migrantes y a quienes se solidarizan con ellas.

Estas problemáticas también existen fuera de Europa. En **Túnez**, en el contexto de la politización de la hostilidad, quienes defienden

los derechos de las personas migrantes africanas negras enfrentan una creciente criminalización. De hecho, el presidente Kaïs Saïed los ha acusado de traidores y mercenarios que reciben financiación extranjera para ayudar a las personas migrantes a instalarse en el país. Estas acusaciones suelen conducir a la imputación de cargos penales, procesos judiciales y arrestos.

A pesar de los crecientes obstáculos, la sociedad civil sigue comprometida con la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Si bien reconocen las preocupaciones económicas y sociales que explotan los populistas de derecha, los activistas abogan por **políticas sociales nacionales** que respeten los derechos humanos y por una cooperación internacional que se centre en las **causas profundas** de las migraciones, en vez de castigar a las personas migrantes. También insisten en la necesidad de abandonar las políticas basadas en el miedo y adoptar soluciones integrales que defiendan la dignidad humana al tiempo que examinan los factores complejos que empujan a las personas a desplazarse.



NACIONES UNIDAS: LA GOBERNANZA MUNDIAL EN CRISIS



LA ONU ENFRENTA CRISIS CRECIENTES QUE SUPERAN SU CAPACIDAD DE RESPUESTA MIENTRAS LOS ESTADOS PODEROSOS PRIORIZAN CADA VEZ MÁS SUS INTERESES NACIONALES ESTRECHOS POR SOBRE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.



LA SOCIEDAD CIVIL VIO FRUSTRARSE SUS EXPECTATIVAS ANTE LA CUMBRE DEL FUTURO DE LA ONU: TUVO UNA PARTICIPACIÓN LIMITADA Y EL DOCUMENTO FINAL ACABÓ SIENDO UN TEXTO CON MUCHOS LUGARES COMUNES Y POCOS COMPROMISOS CONCRETOS.



LA SOCIEDAD CIVIL PROPONE REFORMAS PARA REVITALIZAR LA ONU, TALES COMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DIGITAL, NOMBRAR UN ENVIADO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ESTABLECER UN PROCESO MÁS TRANSPARENTE PARA LA SELECCIÓN DEL SECRETARIO GENERAL.

Las instituciones de gobernanza mundial, creadas para lidiar con los problemas que los Estados no pueden o no quieren resolver, se encuentran hoy desbordadas por los conflictos, el colapso climático, la desigualdad económica, la regresión democrática, los ataques a los derechos y muchas otras crisis. A esto se suman las tecnologías emergentes, como la IA, y los desafíos que las acompañan, como la desinformación, que requieren con urgencia nuevas soluciones globales.

Los organismos de la ONU que se desarrollaron tras la Segunda Guerra Mundial se han mostrado incapaces de detener las atrocidades perpetradas contra los derechos humanos, ya sea en Gaza, Ucrania o Sudán. La Carta fundacional de la ONU enuncia cuatro propósitos: prevenir futuras guerras, consolidar los derechos humanos fundamentales, la dignidad y la igualdad, establecer un marco para la justicia bajo el derecho internacional, y promover el progreso social y la mejora del nivel de vida; sin embargo, apenas y se está avanzando en la aplicación de ninguno de ellos.

Es evidente que la era de la cooperación internacional posterior a Guerra Fría, que dio lugar a importantes acuerdos mundiales para lidiar con los problemas contemporáneos, ha llegado a su fin. Hoy parece imposible forjar un acuerdo mundial para frenar el cambio climático descontrolado o conseguir que los Estados miembros de la ONU adopten de forma unánime los ODS, con su marcado énfasis en los derechos humanos y la justicia social; sin embargo, ambos logros históricos se consiguieron en 2015, hace apenas una década.

Muchos líderes políticos defienden ahora una interpretación restrictiva de la soberanía nacional. Los Estados poderosos anteponen cada vez más sus propios intereses y su visión transaccional de la política, incluso dentro de las instituciones internacionales, en total contradicción con el espíritu de la cooperación internacional.

Esta situación desemboca en posturas de una hipocresía flagrante, ya que los Estados invocan o ignoran selectivamente las leyes y normas internacionales en función de sus intereses. Un ejemplo palpable de ello es la determinación de numerosos Estados del norte global para que Rusia rinda cuentas por sus actos, pero, al mismo tiempo, obstaculizan iniciativas similares en el caso de Israel.

Todas estas tendencias ya estaban en marcha cuando Trump volvió al poder y anunció de inmediato la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como la retirada estadounidense del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con estas decisiones, la crisis de la cooperación internacional se ha acelerado drásticamente.

El Pacto para el Futuro

En estos tiempos turbulentos y de cambios rápidos, la ONU tuvo la ocasión de renovarse en 2024 con la celebración de su tan publicitada **Cumbre del Futuro**, de la que surgieron el **Pacto para el Futuro**,



El mural "Mujer con paloma: dando forma a nuestro futuro común", del artista australiano Fintan Magee en la sede de la ONU en Viena, promueve los ODS y la Cumbre del Futuro.

además del **Pacto Digital Mundial** y la **Declaración sobre las Generaciones Futuras**.

La cumbre tenía como objetivo fortalecer la cooperación internacional frente a desafíos clave, examinar las lagunas de la gobernanza mundial y reiterar la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas y de otros compromisos mundiales cruciales. Sin embargo, lo que comenzó como una idea ambiciosa en 2021, cuando el secretario general de la ONU António Guterres publicó el informe **Nuestra Agenda Común** con el fin de revitalizar la cooperación internacional y reformar la ONU, empezó a desvanecerse frente a la creciente fragmentación internacional y la expresión más evidente de los intereses nacionales. Finalmente, la cumbre se centró más en defender el multilateralismo que en mejorarlo. El hecho de que los Estados tuvieran que unirse para frustrar el **intento tardío de Rusia** de aplazar la adopción del pacto fue un ejemplo de lo difícil que resulta alcanzar acuerdos en el contexto actual.



Trabajadores de los medios durante la 57ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, 9 de septiembre de 2024.

A pesar del arduo trabajo de la sociedad civil, que durante dos años intentó influir en el proceso de elaboración del pacto mediante consultas digitales y su asistencia a una conferencia celebrada en Nairobi (Kenia) en mayo, el proceso distó mucho del enfoque abierto, participativo e inclusivo que deseaba la sociedad civil. De hecho, pocos gobiernos consultaron directamente a la sociedad civil y algunos cuestionaron su participación en el proceso.

La sociedad civil **vio cierto potencial** en el pacto, especialmente en las propuestas para ampliar, si no reformar pertinentemente, el Consejo de Seguridad y acelerar la reestructuración de la arquitectura financiera internacional. Sin embargo, el resultado fue decepcionante en su mayor parte, ya que no estuvo a la altura de las circunstancias: un texto extenso y lleno de lugares comunes, pero con pocos detalles concretos para su aplicación. Dadas las condiciones, un resultado más ambicioso probablemente nunca fue factible.

El Consejo de Derechos Humanos

Tras una vasta campaña de la sociedad civil, al menos se consiguió que Arabia Saudita fuera **excluida** como miembro del Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano de la ONU en la materia. El Consejo tiene la misión de investigar violaciones de derechos humanos y otras situaciones preocupantes, así como de reforzar la protección y promoción de los derechos humanos. Cada año se celebran elecciones para renovar aproximadamente un tercio de sus miembros, quienes ejercen un mandato de tres años con un máximo de dos mandatos consecutivos. Los 47 Estados miembros que lo componen se agrupan en cinco bloques regionales, cada uno con un número fijo de escaños.

Arabia Saudita, un país que viola sistemáticamente los derechos humanos, tiene un espacio cívico cerrado, numerosos presos políticos y un espantoso historial de ejecuciones, ha invertido ingentes



Foto de Christophe Viseur/Getty Images para la Federación de Fútbol de Arabia Saudita.

En medio de un intenso escrutinio internacional, Arabia Saudita no consigue un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aunque es recompensada con los derechos de sede para la Copa Mundial de la FIFA 2034.

cantidades de dinero en **blanquear** su reputación internacional. En 2024, **consiguió** la presidencia de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, ya que ningún Estado se opuso a su nominación, un resultado absurdo dada la situación de las mujeres saudíes, a quienes trata como ciudadanos de segunda clase. A pesar de esto, en la elección para integrar el Consejo de Derechos Humanos quedó sexta, y última en una competición para obtener los cinco escaños de su región.

El problema es que otros Estados con un historial preocupante en materia de derechos humanos sí obtuvieron escaños y que, otros, como la RDC, Etiopía y Qatar, ya están presentes en el Consejo. Esto significa que 27 de los miembros actuales del Consejo —más de la mitad— tienen un espacio cívico fuertemente restringido, mientras que solo seis tienen un espacio cívico abierto. Es vergonzoso que nueve miembros actuales del Consejo figuren en el último informe anual sobre los países

en los que se han tomado **represalias** contra las personas que han cooperado con el sistema de derechos humanos de la ONU.

Uno de los principales motivos de esta situación son las elecciones no competitivas, que se han convertido en la norma, ya que los bloques regionales tienden a presentar solo una candidatura para cada escaño disponible. En la práctica, esto significa que, aunque haya votaciones y estas sean una ocasión para expresar simbólicamente el rechazo a la candidatura, la composición del Consejo está en gran medida predeterminada.

La sociedad civil sigue reclamando elecciones verdaderamente competitivas que permitan excluir del Consejo a los peores infractores y ofrezcan una valiosa oportunidad para denunciar violaciones de derechos humanos, presionar para que se establezcan normas más estrictas y abrir un mayor debate sobre la actuación de los Estados.

También hay otro problema persistente: aunque los derechos humanos son uno de los **tres pilares** de la ONU, junto con el desarrollo sostenible y la paz y la seguridad, este pilar recibe sistemáticamente menos del 5% del presupuesto anual de la organización. Numerosas iniciativas, incluidas las relatorías especiales para países con emergencias en materia de derechos humanos, dependen de contribuciones voluntarias. Además, la escasez de estos fondos y la lentitud en su atribución merman su capacidad de actuación, como ocurrió con la misión de investigación para Sudán.

Existe un problema más general relacionado con el no pago de las cuotas. A febrero de 2025, **solo 65 Estados** habían abonado la totalidad de sus contribuciones. El pilar de los derechos humanos, ya de por sí subfinanciado, es el que menos puede permitirse este retaceo de recursos, especialmente por parte de Estados que siempre encuentran fondos para gastos militares.

La permanente escasez de recursos también limita las posibilidades

de ampliar el acceso de la sociedad civil. Incluso el espacio con que la sociedad civil cuenta actualmente podría verse aún más reducido por razones de ahorro y eficiencia. La revisión del Consejo prevista para 2026 será una buena ocasión para tratar estas cuestiones, y la ONU debe garantizar que la sociedad civil sea escuchada durante este proceso.

La retirada de Estados Unidos

Actualmente la retirada selectiva de Estados Unidos del sistema internacional amenaza con debilitar aún más a la ONU. Si bien Estados Unidos ha obstaculizado en varias ocasiones algunas iniciativas, como cuando bloqueó las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Israel, la legitimidad de las instituciones mundiales se erosiona cuando los Estados poderosos se retiran de ellas. Además, aunque en teoría todos los Estados son iguales en la ONU, en la práctica, las decisiones de Estados Unidos sobre su participación o retirada del organismo tienen más peso que las de la mayoría debido a su estatus de superpotencia y principal contribuyente financiero de las instituciones de la ONU, a pesar de sus frecuentes retrasos en los pagos.

Si todo sigue como previsto, la retirada de Estados Unidos de la OMS entrará en vigor en enero de 2026. No obstante, la decisión podría ser impugnada, ya que no está claro si Trump tiene la autoridad para anular las resoluciones de adhesión adoptadas por el Congreso. Por otro lado, también es posible que Trump revoque su decisión si la OMS introduce cambios de su agrado, puesto que suele negociar a base de amenazas y presiones. Pero si finalmente se retira, la OMS sufrirá un duro golpe. El gobierno de Estados Unidos aporta el **18%** del presupuesto de la OMS y es su mayor contribuyente. Por lo tanto, su retirada dejaría un enorme vacío que cubrir y es probable que la organización tenga que reducir su labor. En este contexto, los avances para la elaboración de un tratado mundial contra las pandemias, que se **está negociando** desde 2021, podrían verse obstaculizados.

Es posible que las entidades filantrópicas aumenten sus contribuciones y que otros Estados intenten paliar la falta de fondos. Aun así, existe el riesgo de que los Estados autoritarios aprovechen la situación aumentando sus contribuciones a cambio de una mayor influencia. China, por ejemplo, podría estar dispuesta a hacerlo.

De hecho, eso fue lo que ocurrió cuando Trump retiró a Estados Unidos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) durante su primer mandato. China llenó el vacío **aumentando** sus aportaciones hasta convertirse en el mayor contribuyente anual de la UNESCO y, al parecer no por casualidad, un funcionario chino fue nombrado su jefe adjunto, 56 sitios chinos recibieron el codiciado estatus de Patrimonio de la Humanidad y China fue capaz de bloquear los intentos de adhesión de Taiwán. Preocupado por la creciente influencia de China, el gobierno de Biden acordó que Estados Unidos se reincorporase a la UNESCO en 2023; sin embargo, esta decisión podría revertirse, ya que Trump ha afirmado que la UNESCO tiene prejuicios contra Estados Unidos y ha ordenado que se revise la orden de reincorporación.

La OMS ya ha sido **acusada** de estar demasiado influenciada por China debido a las decisiones que tomó durante la pandemia. Se la criticó por seguir con demasiada facilidad la línea del gobierno chino y por no analizar adecuadamente los orígenes del brote. China también presionó y consiguió que se **denegara** a Taiwán el estatus de observador en las reuniones de la OMS, obviando que los problemas de salud pública, como las pandemias, no conocen las fronteras. Por todo esto, la sociedad civil debe ser prudente frente a las señales de instrumentalización de las instituciones multilaterales por parte de los Estados.

Las consecuencias para el Consejo de Derechos Humanos pueden no ser inmediatas, dado que Estados Unidos no actualmente es miembro, ya que su mandato concluyó a fines de 2024. El país se reincorporó al Consejo en 2021, después de que Trump decidiera su retirada en 2018, y ya había tomado la decisión inusual de no buscar

un segundo mandato, probablemente porque esto habría provocado una **fuerte reacción** por su apoyo a Israel. No obstante, al margen de su relación con Israel, durante el mandato de Biden, cuando Estados Unidos era miembro del Consejo, Estados Unidos desempeñó un papel generalmente visto como positivo en los asuntos del organismo. Si el país se niega a cooperar, también privará a su propia ciudadanía de un espacio vital para obtener reparación.

También existe el peligro de que las acciones de Estados Unidos inspiren a otros Estados con líderes extremistas a seguir su ejemplo. Por ejemplo, el presidente argentino Javier Milei, gran admirador de Trump, ya ha **anunciado** la retirada de su país de la OMS. Israel también siguió los pasos de Estados Unidos y declaró que no participará en el Consejo de Derechos Humanos. Ambos países alegaron que el organismo tiene un sesgo antisraelí. Por sus propios motivos, en febrero de 2025 el gobierno autoritario de Nicaragua también **anunció** su retirada del Consejo luego de que éste publicara un informe crítico con su pésimo historial de derechos humanos.

Sin embargo, todavía parece improbable que se produzca un efecto dominó. Además, podría argumentarse que si instituciones como el Consejo de Derechos Humanos y la UNESCO resistieron a la primera retirada decidida por Trump, también podrán soportar una segunda. Sin embargo, todo dependerá de lo que ocurra al final del segundo mandato de Trump. Estos embates también llegan en un momento diferente, cuando el sistema de la ONU ya es más frágil y está más dañado. Ahora, la idea misma de multilateralismo y de un orden internacional basado en normas está bajo ataque mientras que los poderes nacionales intransigentes intentan ocupar su lugar. Los procesos con cierto grado de transparencia destinados a lograr el consenso están siendo remplazados por acuerdos a puerta cerrada derivados de juegos de poder. Como consecuencia, se están reduciendo el espacio para la participación de la sociedad civil y las ocasiones para influir en las políticas.



El director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aboga por un tratado mundial sobre pandemias tras la experiencia del COVID-19.

Necesidad de reforma real

Revitalizar la ONU puede parecer una tarea difícil en tiempos de crisis; sin embargo, la sociedad civil tiene algunas ideas sobre qué hacer para empezar a poner a las personas en el centro de la organización y no a los Estados. La iniciativa **UNMute Civil Society**, respaldada por más de 300 OSC y numerosos Estados, propone **cinco recomendaciones** para fortalecer la participación de la sociedad civil: aprovechar las tecnologías digitales para ampliar la participación y la inclusión, reducir la brecha digital centrándose en la conectividad de los más excluidos, cambiar procedimientos y prácticas para garantizar una interacción y participación efectivas y significativas en todas las fases de un proceso, establecer un día de acción anual de la sociedad civil para hacer balance y evaluar los avances en la participación de la sociedad civil, y nombrar un enviado de la sociedad civil ante la ONU.

Estas propuestas concretas y fácilmente realizables podrían allanar el camino para reformas de mayor alcance. Por ejemplo, un enviado de la sociedad civil podría promover las mejores prácticas de participación de la sociedad civil en toda la ONU, garantizar la participación de múltiples actores de la sociedad civil en el trabajo de la ONU y promover el compromiso de la ONU con la sociedad civil en todo el mundo.

La sociedad civil también reclama elecciones competitivas al Consejo de Derechos Humanos, un papel en el escrutinio de los candidatos y que se limite el poder de veto del Consejo de Seguridad. Además, la campaña **Nosotros los Pueblos**, apoyada por más de 200 OSC y más de 100 parlamentarios de todo el mundo, propone la adopción de la **Iniciativa Ciudadana Mundial** para que la ciudadanía pueda lanzar campañas de recogida de firmas para incluir un tema en la agenda de la ONU. Otra propuesta es la creación de una **Asamblea Parlamentaria de la ONU** que complemente a la Asamblea General y **dé voz a la ciudadanía**, además de a los Estados.

En vísperas de la elección del nuevo secretario general de la ONU, la sociedad civil ha lanzado la **campaña 1 por 8.000 millones** para promover un proceso abierto, transparente, inclusivo y basado en méritos, que refleje los ideales de la ONU y favorezca una contribución adecuada de la sociedad civil. Además, dado que el cargo siempre ha estado ocupado por hombres, la campaña también insta a la ONU a que haga historia nombrando a **una mujer feminista** para el puesto.

Todas estas medidas no son más que unos primeros pasos para avanzar hacia un sistema de las Naciones Unidas más abierto, democrático y responsable. Además, estas ideas son factibles y razonables, especialmente en tiempos de crisis, que ofrecen oportunidades para la experimentación. Una ONU más inclusiva será una ONU más eficaz. Por ello, ha llegado la hora de que la ONU adopte las ideas de la sociedad civil y trabaje con los Estados que las respaldan, así como con la propia sociedad civil, con el fin de emprender un camino que haga realidad los principios y objetivos de la Carta de la ONU.

SOCIEDAD CIVIL: LA LUCHA CONTINUÍA

A pesar de las numerosas dificultades que enfrenta actualmente, la sociedad civil sigue luchando en todos los frentes mediante una combinación de incidencia, movilización, campañas digitales, litigio estratégico, diplomacia internacional y cualquier otra táctica imaginable. En un mundo abrumado por la desinformación, el mensaje veraz de la sociedad civil se erige como una herramienta indispensable para contrarrestar los relatos falaces que siembran la división y fomentan el odio hacia grupos excluidos. A medida que se hace más evidente la interconexión y la naturaleza transnacional de los desafíos actuales, la sociedad civil multiplica las acciones solidarias que trascienden las fronteras nacionales y conectan distintas luchas en contextos diferentes.

En 2024, la sociedad civil logró éxitos notables, incluso en circunstancias difíciles. En la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, destacan las victorias en la lucha contra el matrimonio infantil en Colombia y Sierra Leona, y contra la mutilación genital femenina en Gambia. En cuanto a los derechos de las personas LGBTQI+, las campañas de la sociedad civil condujeron a avances en el reconocimiento del matrimonio igualitario en Grecia y Tailandia.

La ciudadanía defendió la democracia: en Corea del Sur, se opuso a la ley marcial; en Bangladesh, derrocó al gobierno autoritario; en Guatemala, aseguró el respeto de su voto; y en Senegal, presionó para que se celebraran elecciones según lo previsto.

En Ecuador, India y Suiza, las victorias judiciales favor del clima y el medio ambiente obligaron a los gobiernos a reconocer las repercusiones del cambio climático sobre los derechos humanos y a

esforzarse más en reducir las emisiones y frenar la contaminación. Actualmente se están aplicando tácticas similares para ejercer presión moral sobre los gobiernos que suministran armas a Israel.

El colapso de las estructuras de financiación está complicando las luchas de la sociedad civil, y la congelación de fondos de USAID es una manifestación del **retroceso global** de la solidaridad internacional. Varios gobiernos, entre ellos los de **Bélgica, Países Bajos y Reino Unido**, así como la **UE**, están recortando la ayuda internacional que contribuye a sostener la sociedad civil y reorientando su apoyo internacional según sus propios intereses, reflejo de la creciente preocupación por la defensa, las ventajas comerciales y el control de la inmigración. Muchos gobiernos han adoptado **leyes hostiles** que dificultan la financiación de las OSC o que las difaman por recibir fondos. Ahora, muchas de ellas enfrentan una amenaza existencial. Esto debe impulsar una búsqueda urgente de nuevos modelos de financiación para apoyar la labor vital de la sociedad civil.

En estos tiempos convulsos e imprevisibles, la sociedad civil debe seguir siendo un faro de esperanza que ilumine el camino hacia un mundo más pacífico, justo, equitativo y sostenible, incluso cuando muchos de los que están en el poder avanzan en la dirección equivocada. La resiliencia, la resistencia y un optimismo inquebrantable son más necesarios que nunca. Aunque las victorias parezcan lejanas y huidizas, la acción cívica sigue siendo fundamental porque alimenta la esperanza, abre la puerta a nuevas posibilidades y une a quienes anhelan el cambio. Si la sociedad civil persevera, incluso en las circunstancias más adversas, llegarán momentos de cambio que servirán de peldaños hacia transformaciones más profundas.



AGRADECIMIENTOS

El análisis contenido en este informe no habría sido posible sin los aportes y opiniones de activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil de todo el mundo. Estas son las personas cuyas voces alimentan este informe. Para leer las entrevistas completas, visite el [repositorio de entrevistas](#) de CIVICUS Lens.

- > AAKAR PATEL
- > ABDELAZIZ AL-HOSSE
- > ABDOU AZIZ CISSÉ
- > ABDUL NASSER RAD
- > ACCESS NOW - JORDAN
- > ACDD - NICARAGUA
- > AKIO TAKAYANAGI
- > ALAAIDDIEN AYOUB
- > ALEXANDER SCHWARZ
- > ALÍ DANIELS
- > ALICIA MÉNDEZ MEDINA
- > ALIX BOUCHER
- > ALVIANI SABILLAH
- > ALVIN NICOLA
- > AMINA HERSI
- > ANA CARMO
- > ANAID ALCÁZAR
- > ANDREAS KRANEBITTER
- > ANDREAS MÜLLER
- > ANJA OLIN-PAPE
- > ANJALI BHARDWAJ
- > ANNE HARRIS
- > ANONYMOUS - MALI
- > ANONYMOUS - MALI
- > ANONYMOUS - TOGO
- > ANONYMOUS - THAILAND
- > ANTONINA LEWANDOWSKA
- > ARIA DANAPARAMITA
- > ARJUN BHATTARAI
- > ARPITHA KODIVERI
- > ARSENEKAH EZEKIEL
- > ARZAK KHAN
- > ASAD IQBAL BUTT
- > ASAL ABASIAN
- > BAHATI RUBANGO
- > BENOÎT MURACCIOLE
- > BINA MASENO
- > BOUBACAR N'DIAYE
- > BRAD ADAMS
- > BRENDAN GILLIGAN
- > BRISKY FANUEL NCUBE
- > CARINA TERTSAKIAN
- > CARLOS GUERRERO OROZCO
- > CARLOS LEONEL GEORGE
- > CARLOS MARÍA PELAYO MÖLLER
- > CARLOS MARTÍNEZ DE LA SERNA
- > CAROLINA AMAYA
- > CATHERINE MBUI
- > CECILIA SCHIRMEISTER
- > CÉSAR ARTIGA
- > CHRIS GARRARD
- > CHRIS JONES
- > CHRISTOPHER CASTILLO
- > CIARA TORRES-SPELLISCY
- > CIDH - ALGERIA
- > CMRSL - KENYA
- > CORNELIUS HANUNG
- > CRISTINA PALABAY
- > DANIELA ARIAS
- > DARÍO IZA PILAQUINGA
- > DARKO DURIDANKSI
- > DARSHATHA GAMAGE
- > DARYL PHILLIP
- > DAVID GOLDBLATT
- > DAVID TRAN
- > DEBORAH BROWN
- > DÉDÉ OETOMO
- > DIMA SAMARO
- > DUMISO GATSCHA
- > EDUARD MARIKASHVILI
- > EHSAN SHAYEGAN
- > ELISABETH PRAMENDORFER
- > ELISABETH STERN
- > EMILY APPLE
- > EMIN HUSEYNOV
- > ENYSEH TEIMORY
- > ERASMO PALAZZOTTO
- > EUNICE AGBENYADZI
- > EVA EKELUND
- > EVA LEVENBERG
- > EVA LÍA COLOMBO
- > EVAN DRUKKER-SCHARDL
- > EVELYN OLUKEYE
- > EZENWA OKORO



- > FABIÁN WERNER
- > FEMKE DE VRIES
- > FLÁVIA PELLEGRINO
- > FLORIANE VOLT
- > FRANCESCA BORG COSTANZI
- > FRANCESCA RESTIFO
- > FRANCESCO MALETTO
- > FRANÇOIS KAMATE
- > FRANK SLIJPER
- > FREDDY GAMAGE
- > FRIDAH WARIRA
- > GABRIELA FUENTES
- > GABRIELA GREILINGER
- > GABRIELA VALENTÍN DÍAZ
- > GINA ROMERO
- > GIORGOS KERATSAS
- > GÖKÇE BALTACI
- > GRAHAM FORBES
- > GUACIRA OLIVEIRA
- > GUILLERMO AVELEDO
- > GÜRKAN ÖZTURAN
- > GUSTAVO DE CARVALHO
- > HALA AL-KARIB
- > HASSAN NURUDEEN
- > HENOK ASHAGRAY
- > HINE-WAI LOOSE
- > HONE MANDEFRO
- > HOPE AZEDA
- > HSIN-HUANG MICHAEL HSIAO
- > IFTEKHAR ZAMAN
- > ILARIA MASINARA
- > ILYAS ADAM
- > IMRAN AHMED
- > INÁ JOST
- > ION MANOLE
- > ISATOU TOURAY
- > IULIANA ILIESCU
- > IVÁN CHANIS BARAHONA
- > IVAN NOVOSEL
- > JACYNTA FA'AMAU
- > JAKOB GUHL
- > JAMIE SHEA
- > JAMIL DAKWAR
- > JANNA SAUERTEIG
- > JASMIN RAMSAY
- > JEFF OKOROAFOR
- > JENNIFER RAUCH
- > JEREMIAH SAM
- > JESHUA BARDOO
- > JING GUO
- > JOAQUÍN ELO
- > JOHANNA CILANO
- > JOMARY ORTEGÓN
- > JONATHAN FOWLER
- > JONATHAN MAGOMA
- > JORAM USEB
- > JORDAN HIGGINS
- > JORGE SANTOS
- > JOSEPH CHERUBIN
- > JUANA ESQUIVEL
- > JUDY GITAU
- > JULIE MURRAY
- > JULIO MORÓN PULIDO
- > JURESSA LEE
- > KANANELO BOLOETSE
- > KARIN VAN BOXTEL
- > KATE WATTERS
- > KAVITHA RAVI
- > KEVIN WESSELS
- > KHALID IBRAHIM
- > KIALI MOLU
- > KIFAYA KHRAIM
- > KIRSTEN HAN
- > KULVINDER NAGRE
- > KYAW WIN
- > LARBI SADIKI
- > LAURA AGUIRRE
- > LISA SAAD
- > LUIS E MEDINA TORRES
- > LUZ MELY REYES
- > MADELEINE SINCLAIR
- > MAHAD WASUGE
- > MALICK NDOME
- > MANUEL M MERCEDES MEDINA
- > MANUEL PÁEZ RAMÍREZ
- > MANUEL TUFRO
- > MANUELA POPOVA
- > MARC LIMON
- > MARCIN SOSNIAK
- > MARCO SASSOLI
- > MARIANO DE ALBA
- > MARIELA BELSKI
- > MARTA FERRARA
- > MARTHE COULIBALY
- > MARTIN BUTCHER
- > MARTIN SVEINSSØNN MELVÆR
- > MARY AILEEN DIAZ BACALSO
- > MATCHA PHORNIN
- > MATHEW GEORGE
- > MAURO CERBINO
- > MAURO GONZÁLEZ
- > MAVERICK PETER SEDA
- > MAXIMILIAN RUF
- > MAZIE STILWELL
- > MENGISTU ASSEFA
- > MERAL ZELLER
- > MICHAL PIŠKO
- > MIGUEL GOMES ANTONIO
- > MIROSLAVA NICOLIĆ
- > MOHAMMAD MOHMADI
- > MOHAMMED JUMA
- > MOHAMMED NDFUNA



- MOOKDAPA YANGYUENPRADORN
- MORENA HERRERA
- MUBASHAR HASAN
- MUHAMMAD ISNUR
- MUHAMMAD MUDASSAR
- MURAT KARYPOV
- MYKHAILO SAVVA
- MYRIAM CORREA
- NAFISSATOU MAIGA
- NAHID ISLAM
- NALY PILORGE
- NANCY ROC
- NATALIA GHERARDI
- NATALLIA SATSUNKEVICH
- NATHALIE TEHIO
- NELSON ROLDÃO
- NERIMA WAKO
- NESHAN GUNASEKERA
- NICOLA HASKINS
- NINO SAMKHARADZE
- NOA MUHOOZI KAINERUGABA
- NYASA RAINBOW ALLIANCE
- OLGA CABALLERO
- OLGA DE OBALDÍA
- OLIVIA SOHR
- OLUWAFUNKE ADEOYE
- OMAID SHARIFI
- OPHELIA KEMIGISHA
- ORIANA IVKOVIĆ NOVOKMET
- OUSMANE MIPHAL LANKOANDÉ
- ÖZGÜR ÜNLÜHISARCIKLI
- PATRICK POON
- PAVLINA PAVLOVA
- PAYMON AZMOUDEH
- PETAR KNEŽEVIĆ
- PETER ANHALT
- PETER MICEK
- PHILIPP JÄGER
- PRAVEEN FERNANDES
- RACHAEL LORNA JOHNSTONE
- RAMÓN GÓMEZ
- RAMÓN ZAMORA
- RAŠA NEDELJKOV
- RASMUS BOSERUP
- RASTO KUŽEL
- REBECCA SHOOT
- REEM ABBAS
- REGINA FONSECA
- REMADJI HOINATHY
- RENATE SCHROEDER
- RENZO POMI
- REZVANEH MOHAMMADI
- RICHARD PONZIO
- RIGOBERTO LOBO PUENTES
- RIZKY ARGAMA
- ROBEL ALEMU
- RODRIGO FLORES CASTRO
- ROSY AUGUSTE DUCÉNA
- SARAH SANBAR
- SARAH TAK
- SHAHARZAD AKBAR
- SHAHINDHA ISMAIL
- SHEENA DOOLEY
- SHIRLEY ABRIELLA KAUPA
- SIBORA DHIMA
- SIMA SAMAR
- SIMÃO FRANCISCO TILA
- SINA ENTESARI
- SINÉAD MURRAY
- SINOMME SAINT CLAIRE
- SIWAR GMATI
- SOLOMON ATSUVIA
- SOO SUH
- SOPHIA GOODFRIEND
- STAFFAN LINDBERG
- STEWARD MUHINDO
- STIRLING DEAN
- SÜHEYLA DOGAN
- SULAIMA ELKHALIFA
- TAHREER ARAJ
- TAMAR JAKELI
- TAMARA BRANKOVIĆ
- TAPIWANASHE CHIRIGA
- TATIANA LUJÁN
- TESSA DOOMS
- THIJS BERMAN
- THOMAS VAN GOOL
- TIM PRUDHOE
- UMAR ALY
- VALERIA CARLINI
- VANDITA MORARKA
- VANINA ESCALES
- VIBE KLARUP
- VIKTORIA KAMUF
- VIOLLA REININDA
- VIRGINIA LAPARRA
- VIVIANA FIGUEROA
- WANGECHI WACHIRA
- WELLINGTON DOS SANTOS
- WI-REX - GERMANY
- XIMENA BARRERA REY
- YANGA MALOTANA
- YOSSI MEKELBERG
- ZAHER SAHLOUL
- ŽAKLINA ŽIVKOVIĆ
- ZAMAN ASHRAF
- ZENAIDA MACHADO
- ZHOU FENG SUO
- ZIAD ABDEL SAMAD
- ZOLELWA SIFUMBA
- ZOYA PHAN

CONÉCTESE CON NOSOTROS

 civicus.org

 info@civicus.org

 [@CIVICUSespanol](https://twitter.com/CIVICUSespanol)

 [/CIVICUS](https://facebook.com/CIVICUS)

 [@CIVICUSalliance](https://instagram.com/CIVICUSalliance)

OFICINA CENTRAL
25 OWL STREET, 6TO PISO
JOHANNESBURGO, 2092
SUDÁFRICA
TEL: +27 (0)11 833 5959
FAX: +27 (0)11 833 7997

CENTRO ONU: NUEVA YORK
WE WORK
450 LEXINGTON AVE,
NEW YORK, NY, 10017
ESTADOS UNIDOS

CENTRO ONU: GINEBRA
11 AVENUE DE LA PAIX
GINEBRA, CH-1202
SUIZA
TEL: +41 (0)22 733 3435